

SITUACIONES OBSERVADAS EN ESCENARIOS
MINEROS DETERMINANTES EN EL EJERCICIO
DEL DERECHO A

PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL

Institute for Human Rights and Business



Centro Regional de Empresas y
Emprendimientos Responsables

Este documento recoge y sistematiza la evidencia cualitativa y cuantitativa, con el objetivo de presentar aquellas situaciones encontradas en las que el derecho a participar en la vida cultural se puede ver impactado. Para navegar por este documento haga click en la situación de su interés.

Navegador de situaciones y derechos

SITUACIONES DE ESPECIAL RELEVANCIA PARA:



Condiciones de vida digna














Educación

Trabajo decente

Condiciones de vida digna

Étnico-territoriales

Vida pública

Situaciones que inciden directamente en este derecho, y que a su vez se relacionan con el ejercicio de otros derechos		Elementos y componentes necesarios para el adecuado disfrute del derecho a participar en la vida cultural		
		Participación en la vida cultural	Acceso a la vida cultural (Desarrollos tecnológicos)	Contribución a la vida cultural
	1 Ocupación de áreas para minería y afectaciones a recursos naturales para el desarrollo de prácticas de subsistencia tradicionales	x	x	
	2 Dificultades en la formación para encadenamientos productivos, diversificación económica y otros oficios	x	x	x
	3 Cambios en las dinámicas de uso de recursos locales	x		
	4 Cambios en la situación de seguridad en escenarios mineros	x	x	x
	5 Prácticas tradicionales que dependen de extracción de minerales	x	x	
	6 Desarrollo de actividades mineras en zonas con aptitud para otras actividades productivas	x	x	
	7 Desarrollo de la actividad minera en espacios de importancia cultural	x		
	8 Migraciones asociadas a la búsqueda de oportunidades en la industria extractiva	x	x	x
	9 Reasentamientos involuntarios por la actividad minera	x	x	
	10 Desplazamiento forzado en contextos mineros	x	x	x
	11 Insuficiente protección del patrimonio arqueológico	x		
	12 Acciones para la innovación, mejoramiento y acceso a nuevas tecnologías para la actividad minera		x	
	13 Iniciativas empresariales para favorecer la vida cultural en los entornos mineros		x	

SITUACIONES OBSERVADAS EN ESCENARIOS MINEROS DETERMINANTES EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL Y A GOZAR DE LOS BENEFICIOS DEL PROGRESO CIENTÍFICO

La explotación minera, en cualquiera de sus formas, es una actividad que deja huellas en el territorio que se evidencian de muchas formas incluidos los cambios del paisaje, modificaciones de ecosistemas, biodiversidad, recursos hídricos, entre otros. Estos, cambios, sumados a la llegada de una nueva actividad económica, han generado transformaciones en las dinámicas sociales, culturales y económicas de las poblaciones locales y han limitado o transformado el ejercicio de derechos, tanto individuales como colectivos.

Para el análisis de la incidencia de la minería en el derecho a participar de la vida cultural, la relación de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas con el territorio será el eje transversal por ello se desarrolla a continuación comprensión clara de este concepto.

El territorio es una dimensión que excede lo estrictamente predial para incluir relaciones sociales construidas en el tiempo por las personas que habitan un espacio determinado. A este espacio, en el que se desenvuelven dichas relaciones, es lo que se denomina territorio. Estas relaciones incluyen lo social, lo económico y también lo cultural (DELANEY, 2005). La forma en que se construyen las interacciones entre estos tres aspectos de la vida en comunidad tiene distintas características según la forma en que sus integrantes interactúan entre sí, con otras comunidades y con el espacio mismo. Según Luis Guillermo Vasco “*el territorio es algo que va más allá del espacio geográfico [y abarca] el conjunto de muy diversas relaciones mediante las cuales se apropian, utilizan y piensan dicho espacio, socializándolo*” (VASCO, 2002).

El territorio sería entonces el producto, y a su vez uno de los determinantes de formas de ocupación; relaciones laborales y productivas; tensiones sociales; mecanismos de autoridad; dimensiones inmateriales y simbólicas; sitios históricos y sagrados; entre otras. Es por eso que el resultado de estas interacciones es lo que caracteriza a una comunidad determinada y la diferencia de otras.

En este sentido, la sociabilidad vinculada a lo territorial es un elemento crucial a tener en cuenta cuando se analizan los impactos de la minería sobre el derecho a la vida cultural. La expansión de los frentes mineros sobre los territorios de distintas comunidades, además de afectar el disfrute de derechos más medibles (Véase la sección dedicada a la libre circulación y permanencia y el capítulo de derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta previa), también pueden tener una influencia negativa sobre los aspectos simbólicos y espirituales de la vida en comunidad. Estas afectaciones se producen en comunidades étnicas y campesinas por igual dado la relación especial que estos grupos humanos han establecido con el territorio. Por otro lado, también hay comunidades que han practicado la minería de forma tradicional por lo que ésta es concebida como

un elemento compositivo de su cultura. En algunos casos estas comunidades ven su derecho a la vida cultural limitado por la acción regulatoria del Estado, por el accionar de mineros informales que introducen nuevas técnicas de explotación minera (un caso frecuente es la maquinización de la minería de oro) o por la incidencia de GAI (Grupos Armados Ilegales) sobre los territorios y la minería que se realiza en ellos.

Restricciones o impedimento a formas de vida tradicionales o tradiciones culturales por causa de la actividad minera.

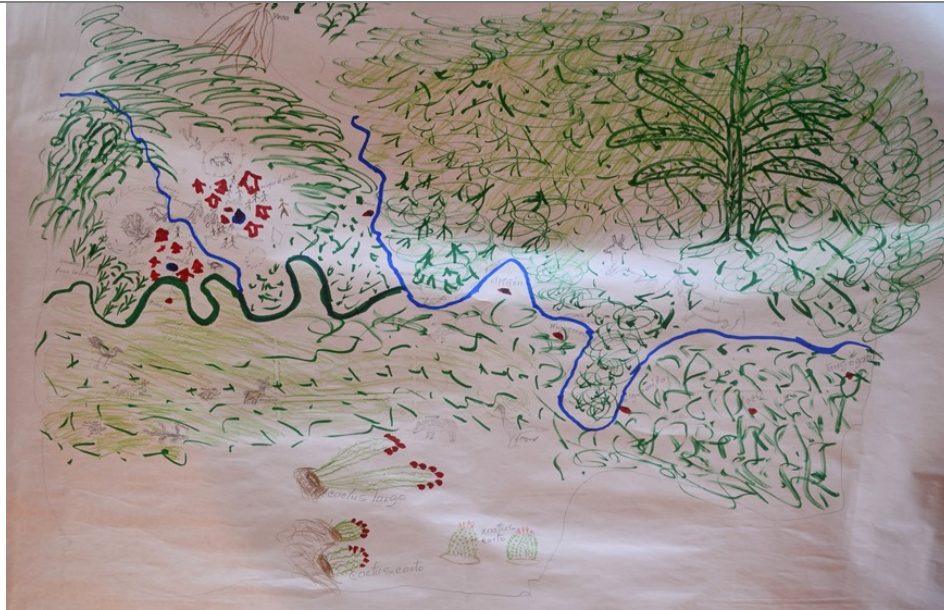
Impedimentos para el desarrollo de prácticas de subsistencia tradicionales

La forma en que comunidades étnicas y campesinas producen los bienes necesarios para su subsistencia es, además de una práctica económica, una dimensión más de la vida cultural de estos grupos humanos. Por esta razón es necesario articular en el análisis la manera en que se produce la vida material con lo que significa este proceso para las comunidades involucradas. Entre las prácticas tradicionales más mencionadas está la agricultura, la caza y la pesca, además de prácticas de intercambio no monetarias basadas en relaciones de parentesco, compadrazgo o de amistad entre miembros de distintas comunidades. La minería artesanal y tradicional también es una práctica de subsistencia vinculada a valores culturales.

1. Ocupación de áreas para minería y afectaciones a recursos naturales para el desarrollo de prácticas de subsistencia tradicionales

La minería a gran escala, por sus características, tiene grandes posibilidades de romper la relación de los pobladores con el territorio en las zonas en las que tiene incidencia. En el caso del carbón, además de necesitar una superficie amplia para la explotación, se han desviado varios ríos, arroyos y quebradas. Estos son factores de vulneración del derecho a la vida cultural por las siguientes razones: 1) el aumento progresivo en la dedicación de extensiones de tierras a la minería puede limitar el acceso a lugares sagrados, sabanas comunales, actividades productivas de subsistencia (como caza, agricultura, pastoreo y ganadería), entre otras; y 2) La ruptura de prácticas de sociabilidad tradicionales por el mayor cubrimiento de territorio por la actividad minera y/o el desvío de cuerpos de agua (Ver capítulo de derecho de libre circulación y permanencia y derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta).

Según las empresas en el Cesar la desviación de los cuerpos de agua se ha realizado dentro del área concesionada y en tierras propias de la compañía. Una de las empresas argumentó que estos se han hecho tras llevar a cabo estudios de impacto ambiental, presentados a las autoridades pertinentes y socializados con las comunidades, por lo cual “el impacto a los cauces ha sido mínimo y se han tomado las medidas de mitigación y compensación correspondientes”



Representación gráfica del territorio de 2 de comunidades antes de la llegada de la minería en La Guajira. Elaborada durante un taller de cartografía social con adultos de las 2 comunidades

Según un funcionario de la Secretaría de Planeación del Cesar, la actividad minera genera “daños al suelo, baja del nivel freático, intervención de ríos y quebradas con impactos sobre la fauna, flora, cauce, aluviales y aguas subterráneas”. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo estimó que escasean las tierras para el cultivo en el departamento porque la propiedad hoy es privada: no se puede cazar y se han reducido los espacios para disfrutar del entorno propio de las comunidades que habitan en la región. Ante esto, la empresa argumentó que la actividad minera, como toda actividad humana, genera impactos ambientales y sociales que son previstos en las Licencias Ambientales y en los permisos que otorgan las CAR para prevenirlos, mitigarlos, corregirlos o compensarlos conforme señalen las autoridades en procesos regulados por la ley. Para ello las autoridades hacen vigilancia permanente del cumplimiento de los planes de manejo ambiental de los proyectos, y están muy atentos a las afectaciones no previstas de los proyectos, para imponer medidas de corrección o mitigación.

Por su parte, un miembro de una ONG activa en la región sostuvo que la infraestructura agrícola y la economía campesina han sido las más damnificadas por la expansión minera. Según su estimación mientras que la minería ha generado 25,000 empleos en el Cesar (del que el 10% es mano de obra local), 150,000 empleos se perdieron de la agricultura y la ganadería. Lo que queda es una población de campesinos que perdieron su forma de vida tradicional por la “destrucción de la estructura económica” previa. Un académico experto en temas agrarios sostuvo que el empleo rural se ha reducido y se ha producido desplazamiento hacia las cabeceras urbanas: “el carbón ha sido una causa de desplazamiento del sector rural”. Afirma que el campesino no sabe de minería y que la calidad de vida se ha afectado. Este entrevistado es de la opinión que el principal impacto de la minería sobre la actividad agrícola es la afectación de las corrientes de agua que alimentaban áreas productivas.



Cultivo de maíz, al fondo se puede observar una Bocamina

Las pequeñas parcelas han sido secundarias durante mucho tiempo frente al cultivo de algodón a gran escala y la ganadería extensiva. Las tierras planas han sido el lugar en el que, históricamente, estas dos actividades, sumadas a la palma aceitera, han generado mayores dinámicas de privatización y concentración de la tierra (Cinep/Programa por la Paz, 2014)¹. La adquisición de terrenos para la actividad minera es un factor más en el proceso de concentración de la tierra pues una gran cantidad de tierras son utilizadas para la extracción de carbón o como botaderos de material estéril (Coronado, Catrileo-Arboleda, Restrepo, & Delgado, 2014).

Varios entrevistados (tanto actores comunitarios como miembros de la institucionalidad municipal y departamental) manifestaron que, además de lo anterior, también se produce emisión de polvillo de carbón, la pérdida de especies de cacería y un aumento de la contaminación sonora. Estos impactos ambientales, sean reales o percibidos², generan limitaciones al disfrute del derecho a la vida cultural.

Las empresas por su parte establecieron que los estudios de calidad de aire en la región realizados tanto por CORPOCESAR con su red de monitoreo como por la empresa y su red, además de otros estudios realizados por terceros independientes, han comprobado que el material particulado presente en las poblaciones del área de influencia proviene principalmente de las poblaciones mismas, su estilo de vida y costumbres culturales.

Según la empresa, en las áreas concesionadas está prohibida la cacería, y por el contrario, la compañía cuenta con profesionales e infraestructura dedicada a la protección de todas las especies.

¹ La pequeña propiedad se ha mantenido en la Serranía del Perijá, que ocupa la margen oriental de los municipios de La Jagua y Becerril.

² En caso que los impactos ambientales solo sean una percepción de los habitantes de la región, aún se sigue afectando la forma en que se relacionan con su territorio y con los demás y por tanto pueden limitar su ejercicio del derecho a la vida cultural.

Así lo mencionó un miembro de la empresa: “contamos con resguardos y áreas dedicadas a la preservación de ecosistemas. Esto, si bien podría sonar a una restricción para los pobladores, en realidad se convierte en la protección necesaria para que puedan persistir especies en la región, pues cuando se empezó a aplicar la política ya había especies que se consideraban extintas en la región, y que poco a poco se fueron recuperando gracias a las áreas de protección ofrecidas por la empresa en sus instalaciones.”

Durante un recorrido realizado en una comunidad del centro del Cesar se recopiló la percepción de varios habitantes. Una anciana recuerda así su relación con el territorio: “vivía sin subsidio pero tenía crías y comida a tiempo. Lavaba ropa en los puertos del río. Se podía entrar a otras fincas pero ya no se puede ni cortar leña. Ahora se compra todo en el mercado”. Otra habitante manifestó, “las minas nos acabaron la agricultura, pesca y caza. Ahora la vida es más dura”. Según su percepción “La cultura se acabó. Ya no puedo hacer las galletas que hacía antes porque no hay leche, ni harina, ni queso”.

Otro habitante sostiene que “antes vivían de la agricultura, para ser agricultor no se necesitaba ser bachiller” y que “con la llegada de la minería se acabó la agricultura y para poder conseguir un empleo en la mina hay que tener estudios”, esto ha llevado a dificultades para conseguir medios de subsistencia. La conclusión a la que llegó esta persona es que las oportunidades laborales que hay son muy reducidas. Hoy en día, se han visto obligados a trabajar en los cultivos de palma por un jornal. Lo anterior refleja distintas preocupaciones sobre las condiciones actuales de subsistencia y la sensación de ruptura con una vida cultural anterior que es añorada por los miembros de la comunidad.

Otras comunidades de Cesar comparten varias de las apreciaciones ya citadas. Un líder comunitario que solía ser campesino afirmó que “*se vivía de la pesca, la ganadería y la agricultura. No había atropellos y ahora todo se puso caro*”. También se preguntaba “*¿De qué sirve tener toda la plata del mundo si se tiene toda la necesidad del mundo?*”. Un miembro de una comunidad campesina opina que “*los problemas de hambre se deben a que las empresas desplazaron los medios de vida. Los agricultores no tienen garantías y cuando pierden su cosecha quedan desamparados*”. Otra persona afirmó que “*antes había más trabajo. Ya no hay agricultura ni cultivos que eran la fuente de empleo de la región*”. Un líder comunitario expresó que

“Cuando llega [una empresa minera] ya todo empieza a cambiar, las actividades agrícolas ya no podían ser las mismas, los jóvenes se empezaron a enfocar en la minería, querían trabajar en la minería, y eso que en esa época ya existía la palmera, y la palmera nos cambia de actividad pero no nos cambia la vocación agropecuaria. Los jóvenes si han cambiado porque en la empresa se gana más, pero para nosotros los mayores queremos hacerles entender que la minería no va a estar todo el tiempo, ella tiene su fin, puede que sea en 30 años, pero de qué van a vivir si la tierra ya está toda llena de huecos, y ya no va a haber mina”.

Frente a esto, la empresa ha sustentado que, normalmente, cuando se presenta una actividad industrial que ofrece una alta demanda de empleo, en una zona con muchas

necesidades y una falta de presencia del Estado histórica, es inevitable que se presenten fenómenos migratorios. Según lo argumentan, las licencias ambientales tienen un componente social diseñado para mitigar el impacto de este tipo de proyectos. Lo difícil es prever el alcance del crecimiento físico y demográfico en el tiempo, y el nivel del incremento de las necesidades, por ejemplo, en servicios públicos. Aquí la responsabilidad, también recae sobre los funcionarios públicos municipales y departamentales en términos de los planes de desarrollo correspondientes, y los proyectos para la inversión de regalías e impuestos que a su vez redunde en satisfacer las necesidades de sus habitantes.

2. Dificultades en la formación para encadenamientos productivos, diversificación económica y otros oficios

Un funcionario del SENA regional afirmó que hay un interés muy fuerte por formarse en minería y que en los programas dedicados a la agricultura a veces no se llenan los cupos pues los aprendices prefieren dedicarse al sector minero. Esta motivación está dada por los altos salarios devengados por los trabajadores mineros en relación a otras actividades que les permiten patrones de consumo que generalmente están fuera del alcance del común de la población (Ver capítulo derecho al trabajo).

Este cambio en las aspiraciones de los jóvenes marca un cambio cultural importante frente a las personas de más edad y está motivado por los incentivos económicos generados por el tránsito de economías agrarias de pequeña, mediana y gran escala, (en las que combinaba el pancoger, la pequeña parcela, la caza, la pesca y el trueque con el jornaleo) a una economía basada en relaciones salariales e intercambios exclusivamente monetarios. Mientras que la población de más edad extraña la vida que se tenían previa a la actividad minera³, los habitantes más jóvenes tienen referentes culturales diferentes que los impulsan a buscar opciones laborales más rentables, entre las que muchas veces se incluyen actividades informales como el mototaxismo o ilegales como el contrabando de gasolina.

El funcionario del SENA explicó que la situación puede ser problemática pues *“muchos de estos muchachos que se forman y empiezan a ganar bien y rápidamente se desbordan porque no tienen un plan a futuro”*. La ruptura del modelo salarial entraña entonces fuertes tensiones sobre la cultura tradicional mantenida por los grupos etarios mayores con la que se está configurando entre la población de menor edad. Esto también es consistente con la aparición de prostitución, drogadicción y alcoholismo en la región.

Un factor adicional a tener en cuenta es que, a pesar de que ser un trabajador minero es una aspiración común entre los jóvenes, la capacidad de absorción de personal de las empresas no alcanza a satisfacer la oferta de mano de obra por lo que muchos aspirantes no encuentran un campo propicio para desarrollar su actividad profesional (Ver capítulo derecho al trabajo).

³ Hay que recordar que la vocación agraria del Cesar data de la Colonia, mientras que la minería irrumpió en el departamento a finales del siglo XX.

3. Cambios en las dinámicas de uso de recursos locales

La respuesta estatal a nivel regional para la problemática agraria no ha sido suficiente para reactivar el sector, y al contrario, se ha generado un proceso de concentración de la actividad agrícola en un solo renglón. Gamarra (2005) identificó que en 1990 había 265.000 hectáreas en promedio dedicadas a la agricultura. En 2002 esta cifra pasó a 134.673 hectáreas. En los mismos años la palma africana pasó de 16.552 hectáreas en 1990 a 39.012 en 2003 (GAMARRA, 2005). Según cifras publicadas en el sitio web del ICA el cultivo ocupaba 63.000 hectáreas en 2014 (ICA, 2014).

La combinación de minería, monocultivo de palma y ganadería extensiva en el corredor minero del Cesar, además de los impactos ya mencionados, también produce afectaciones a la seguridad alimentaria.

Un informe del PNUD ha reseñado la debilidad del Estado en el departamento del Cesar. Identifican que a los gobiernos locales se les ha dificultado “*convertirse en gestores del desarrollo de sus comunidades*”. La política estatal ha mostrado “debilidades técnicas, políticas y administrativas” lo que no ha permitido una realización de acciones tendientes a mejorar la situación general del departamento, que se caracteriza por tener profundas limitaciones en la cobertura y ofertas de servicios básicos comparado con el contexto nacional (PNUD, 2014).

Sin embargo, según afirmaron funcionarios de la gobernación, actualmente se están destinando recursos provenientes de las regalías a proyectos de agricultura por medio de los OCAD. También sostienen que el nuevo régimen de regalías ha contribuido a desfinanciar a los municipios mineros ahondando la brecha de NBI entre estos municipios y el resto del país.

Por su parte, en La Guajira se reportaron situaciones en las que grupos de la etnia Wayúu han visto sus formas tradicionales de producción de bienes para la subsistencia afectadas por la actividad minera⁴.

En Boyacá y Cundinamarca, funcionarios de los gobiernos locales y algunas comunidades también argumentan que las actividades tradicionales de subsistencia han sido trasladadas a causa de la minería. Por un lado, en casos en los que la gran minería genera afectaciones en los suelos y por otro lado, en casos donde las principales actividades económicas no son rentables por lo que los pequeños productores deciden trabajar en la minería para su autosostenimiento y el de sus familias.

En el municipio de Corrales, Boyacá, por ejemplo, un miembro de la comunidad sostuvo que la responsabilidad asumida por parte de las empresas en las transformaciones territoriales no es visible, puesto que la minería ha generado afectaciones que han incidido en las actividades tradicionales de subsistencia, especialmente en la agricultura y la ganadería. Así lo argumentó el miembro de la comunidad cuando expuso: “*Ahora los locales se van de la vereda, porque no hay condiciones dignas*”

⁴ Algunos de los aspectos de este tema han sido mencionados en los capítulos sobre libre circulación y derechos étnico territoriales, propiedad de la tierra y consulta. Otros aspectos serán desarrollados en el siguiente subtítulo.

para vivir, no hay agua para cultivos, la contaminación llega a los pastos y estos se enferman. Entonces las personas se van a Sogamoso a trabajar.”

En cambio, para el caso del municipio de Ubaté, pequeños productores se dedicaban a la ganadería y a la producción de la leche; sin embargo, debido al decrecimiento de los precios de la leche encontraron en la minería de arcilla una posibilidad viable para su manutención. A pesar de que esta comunidad presenta algunos retos en términos de formalización y cumplimiento normativo, su calidad de vida ha mejorado con la venta del ladrillo en el municipio.

En los departamentos del litoral Pacífico (Chocó, Cauca y Nariño), la explotación aurífera artesanal ha sido una actividad complementaria realizada por algunas comunidades para el sustento diario y ha convivido principalmente con la agricultura. En estas regiones suelen converger altos índices de pobreza y desempleo con minería de pequeña o mediana escala así como de gran minería formal, informal o criminal⁵. Esto ha generado impactos negativos en la creación de empleo para la población local en cuanto se desplazan actividades económicas tradicionales. También se ve limitada la diversificación económica, la seguridad alimentaria y las actividades de subsistencia agrarias.

La llegada de actores que explotan el mineral por medio de técnicas diferentes a las tradicionales como las retroexcavadoras, las dragas o los dragones, ha fomentado una ruptura en las costumbres en algunos municipios del Chocó, *“quienes eran agricultores se quedaron sin tierra para cultivar, y terminaron cambiando la agricultura por el barequeo que va detrás de la retro, porque la sacada del orito del río siempre existió”*.

La itinerancia en estas comunidades, genera rupturas respecto a las formas tradicionales de vida pues el cambio de vocación productiva de una producción agropecuaria hacia una explotación mecanizada minera ha vulnerado los procesos que suceden al interior de las comunidades. La necesidad de irse detrás de la retroexcavadora para continuar con el barequeo se debe a que por donde va pasando la máquina se va acabando la tierra. Los suelos quedan estériles e inservibles, el agua contaminada y la gente sin posibilidades de sustento, por lo tanto el panorama resultante es uno en el que prima la inseguridad económica y alimentaria.

Por su parte, otro poblador del departamento del Chocó afirmó que con la llegada de la minería de retro al departamento,

“Ya tampoco se puede ir de caza, porque no hay ni bosque ni animales [...], solíamos cazar el armadillo, guagua, tatabro, guatil, perdiz, oso perezoso, etc. y en el río tampoco se puede pescar porque ya no hay peces: el dentón, la zabaleta, la mojarra, a pesar de que algunos mineros reforestan, como el bosque se demora en crecer... Supongo que los animales se demorarán en volver, si es que lo hacen”.

En este mismo departamento, un funcionario de la Alcaldía de Sipí hizo referencia al sentimiento generalizado de abandono por parte del Estado. Explica que la situación de pobreza del

⁵ La minería criminal hace referencia a actividades vinculadas con dinámicas delictivas y/o grupos armados al margen de la ley.

departamento es un problema estructural asociado a la escasez de fuentes de trabajo, que arrastra a la población a diferentes formas de “rebusque”, impidiendo la planificación de la economía. En estos contextos, la población opta por economías de corto plazo, que les provean un insumo inmediato, tales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos.

De igual manera, ha generado un desplazamiento de las comunidades de tradición minera,

“En el Baudó (Chocó) hay más agricultura, mientras que en el San Juan hay más minería, y en esa tradición está Río Iró, de dónde soy yo. Le explicaba que la retro dejó a muchos sin tierra así que hoy para poder sustentar a la familia, un miembro debe migrar sea a Medellín, Cali o Bogotá, para poder mandar plata”.

Un funcionario de la Alcaldía de Condoto, Chocó, explicó cómo la entrada de nuevas prácticas mineras a la región afecta la coexistencia de diversas actividades económicas en un mismo territorio y crea conflictividad social:

“En Condoto la tierra es netamente minera [ancestral], pero con la llegada de las retros en los 80, ésta dejó de ser una alternativa y se volvió un conflicto por la tierra porque tradicionalmente la minería no era la actividad principal sino que compartía con otras actividades que también necesitaban de la tierra, como la agricultura”.

4. Cambios en la situación de seguridad en escenarios mineros

Algunas de la problemáticas sociales que habitantes de las zonas estudiadas perciben como situaciones asociadas a la actividad minera son la población flotante en la región, el abandono de adultos mayores, aumento en la mendicidad y la delincuencia común, transformaciones de las identidades y cambios en prácticas sexuales, mayor consumo de drogas y alcohol, y más violencia intrafamiliar.

En Antioquia, por ejemplo, un habitante del municipio relató:

“La gente ¿qué opinión se forma de Segovia pero a la distancia? Que en Segovia todo lo que brilla es oro, pero no aquí no todo que brilla es oro. Aquí hay mendicidad; aquí hay una cantidad de personas... de adultos mayores que no tienen ninguna protección; ha hecho carrera lo que es alcoholismo y la drogadicción tremenda; y ahora que se salieron todos esos muchachitos del closet todos estos muchachos gays por todas partes eso está lleno y eso no es un pecado pero cada cual el que nació así. Pues listo, eso ha hecho carrera en el sentido en que se volvió vicio”.

Acorde con lo propuesto por el entrevistado, el abuso de alcohol y drogas en la región derivan en violencia intrafamiliar. Estas cuestiones trascienden el ámbito familiar y resquebrajan el tejido social en diferentes instancias como el credo religioso y espiritual

“Aquí las cuestiones de violencia intrafamiliar son tremendas. Hablábamos de alcoholismo y drogadicción y eso es un detonante de la violencia intrafamiliar. Las mujeres también

beben como “machos asoliados” igual que el hombre y enseguida se dan golpes en la calle o en la casa”.

(...) La realidad es lo que les dije al principio, cambian de religión para tal vez mejorar la calidad de vida, pero desafortunadamente el medio los hace caer. Imagínate, entran a una mina ven robando a los demás se contagian de eso; ven a los amigos por ahí tomando licor y con plata y ellos bien pobres y el amigo lo invita “*venga hermano, le doy \$50.000 pa’ que se compre el mercado pero quédese tomando una cerveza poaquí conmigo*”... lo dañan”.

5. Prácticas tradicionales que dependen de extracción de minerales

En el caso de la explotación de materiales de construcción existen municipios en los que la pequeña minería es en sí misma una práctica tradicional de subsistencia. Por ejemplo, en el municipio de Ráquira, Boyacá, durante décadas, las comunidades se han dedicado a la extracción de arcilla para realizar artesanías, las cuales venden para su sustento. Esta actividad se ha desarrollado de generación en generación, involucrando a todos los miembros de las familias. Por lo general, los chircales donde extraen la arcilla de manera tradicional están localizados en los patios de las casas, por lo que los pequeños mineros consideran que no es necesario cumplir con ningún requisito normativo puesto que sus antepasados nunca tuvieron que hacerlo. Tal y como lo expresó una funcionaria del gobierno local del municipio, las familias ven esta extracción como una labor ancestral y no tienen conocimiento frente a las afectaciones a las fuentes hídricas, ni frente a los daños paisajísticos y morfológicos de los suelos:

“La mayoría de los artesanos no asocian la extracción de arcilla con minería, y mucho menos con el licenciamiento ambiental. El mayor problema es que la arcilla está alrededor de todo el municipio. Las familias extraen arcilla en los lotes de las casas”.

6. Desarrollo de actividades mineras en zonas con aptitud para otras actividades productivas

Diversos actores comunitarios en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Boyacá afirman que la entrada de la minería a contextos de pobreza y desempleo afecta la actividad agrícola y va en detrimento de la seguridad alimentaria. Esta dinámica está asociada a la brecha de ingresos en una y otra actividad. Por ejemplo, un actor comunitario en el Macizo Colombiano caucano comparaba el jornal en agricultura (que oscila entre los \$5,000 y \$12,000) recogiendo café, coca, amapola con el jornal percibido en una mina de oro “*sacando piedra de la mina*”⁶ de aproximadamente \$60,000 pesos.

Por su parte, un actor comunitario del norte del Cauca explicaba la sustitución de la agricultura por minería en una región de vocación tradicional mixta:

⁶ Esta es una de las actividades más pesadas de la minería de oro de socavón. En algunas regiones se le llama “catanguear”.

“El campesino deja de ser asalariado de cultivos de caña, cacao, yuca, donde gana entre \$15,000 y \$20,000 por jornal. Con la minería [aluvial] puede ganar entre \$100,000 y \$300,000 en una hora, y aproximadamente \$700,000 en un día. Por esto, la minería atrae hombres, mujeres y niños por igual”.

Por otra parte, en municipios con una vocación mixta entre minería y agricultura, como es el caso de los territorios indígenas del norte del Cauca, la llegada de la minería ilegal ha generado división social asociadas a diferentes posiciones frente a la actividad. Los ancianos y aquellos que defienden las costumbres tradicionales suelen oponerse a la minería. Otros miembros de las comunidades apoyan una postura intermedia a favor de la minería artesanal. Finalmente, algunos cabildos están a favor de la minería mecanizada controlada por ellos mismos. A pesar de la diversidad de opiniones, existe un consenso en estas comunidades alrededor de la oposición total a la gran minería.

Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo en el norte del Cauca, este fenómeno genera conflicto entre organizaciones sociales de base que detentan distintas posiciones sobre la minería; también se producen estigmatizaciones, amenazas y asesinatos de defensores del medio ambiente. El fenómeno es mucho más complejo cuando la minería de retroexcavadoras atrae el barequeo, legitimando la gran minería ilegal en las regiones a través de la cooptación de comunidades en contextos de vulnerabilidad. De acuerdo a un funcionario de la Fiscalía en esta misma región del Cauca, *“los [grandes] mineros generan sentido de pertenencia a punta de migajas a la comunidad, compran su territorio y su silencio”*. Estas dinámicas fracturan procesos comunitarios y tiene como consecuencia la pérdida de identidades locales.

En el Suroeste antioqueño, de vocación cafetera, la llegada de la minería no es bien vista en ninguna de sus formas: ni a pequeña escala, ni a gran escala. La relación entre acaparamiento de tierras y proyectos de minería ha generado un quiebre en las actividades tradicionales de subsistencia. Así lo estableció un actor comunitario del Suroeste: *“hay un desplazamiento de la mano de obra del campo a la minería es decir, el café se está perdiendo”*.

Un funcionario de la gobernación de Nariño afirma que un fenómeno similar se presenta pues

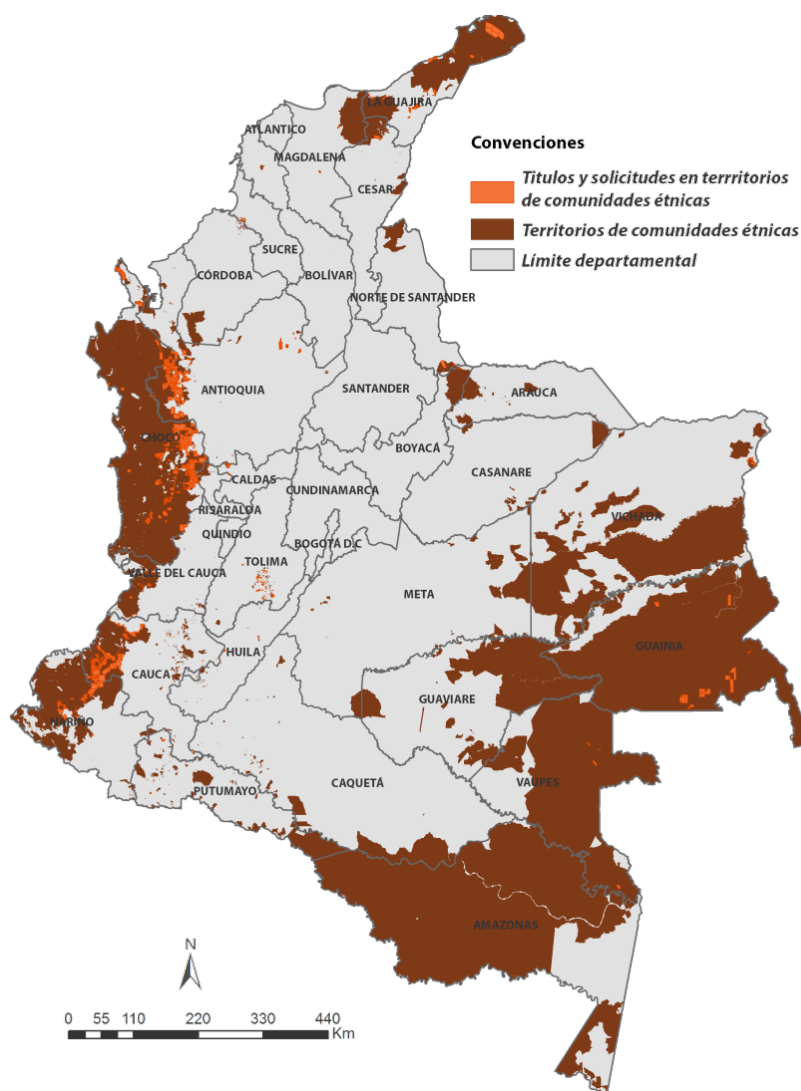
“Nariño es un departamento netamente rural, cerca del 56% de la población vive en el sector rural o tiene una relación directa con lo rural, [...] la producción se expresa en una hectárea en promedio, lo que maneja la gente para producir y eso porque a veces especialmente en esta zona [Andina] es complicadísimo el acceso a la tierra. Quedarse en la vocación campesina es muy complicado, la ganancia en el sistema formal es nula por lo que diversifican sus actividades, las mujeres tejen sombreros, cuidan cuyes, venden artesanías etc. pero estas actividades chocan con la llegada de la minería por la cuestión de la tenencia de la tierra”.

En cuanto a las alternativas, mineros y actores comunitarios hacen referencia a la importancia de generar proyectos productivos mixtos. Incluso los pequeños y medianos mineros en municipios de tradición minera tales como el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño reconocen la importancia de la diversificación de la economía, de retomar la vocación de agricultura y pesca en la región, apoyándose en la minería para generar recursos adicionales.

7. Desarrollo de la actividad minera en espacios de importancia cultural

La pérdida de acceso a zonas en las que las comunidades desarrollan actividades vinculadas con aspectos simbólicos, rituales o de sociabilidad afecta el desarrollo de su vida cultural⁷. Es en estos espacios en los que se construyen las dinámicas que generan el mayor arraigo de las personas con el territorio. La actividad minera en muchos de los casos estudiados se desarrolla en territorios pertenecientes a comunidades étnicas, como lo muestra el siguiente mapa.

Mapa 1 Titulos y solicitudes a 2014 en territorios de comunidades étnicas (Resguardo Indígenas y territorios colectivos de comunidades negras)



Fuente: Elaboración propia con información del catastro minero Colombiano y del IGAC-SIGOT

⁷ Al respecto véase los capítulos de libre circulación y derechos étnico territoriales, propiedad de la tierra y consulta.

En el caso del pueblo wayuú, perder acceso a espacios como el cementerio puede romper aspectos fundamentales del tejido social construido sobre los territorios⁸. El cementerio es uno de los anclajes territoriales más importantes para los wayuú:

“El concepto cosmogónico de territorio wayuú implica tener en cuenta un ciclo fundamental: en la vida cotidiana de un wayuú se hallan presentes cuatro que se relacionan de manera vertical para la convivencia colectiva de los clanes definidos por parentesco materno: Lo humano, (constituido por los wayuú que habitan y conviven en el territorio; los que se pueden ver y tratar, aliar, o contradecir, pero que se rigen por las normas ancestrales determinadas por los parientes de carne (apüshi o parientes maternos) y los de sangre (oupayu, o parientes paternos), y por los cementerios a los cuales se adscribe cada territorio” (KLIMAFORUM LATINOAMERICA NETWORK, 2015).

Los otros tres elementos a los que hace referencia el artículo citado son lo sobrehumano (espíritus de wayuú muertos), lo natural (animales, plantas y recursos en el territorio) y lo sobrenatural (espíritus de enfermedades o almas en pena que producen enfermedades). La muerte para los wayuú no es una situación definitiva. En ese estado de vida *post mortem* el difunto se aparece a sus familiares en sueños para prevenirlos sobre lo venidero, por lo que sigue siendo parte fundamental de la vida del clan. Entre cinco y siete años después de ser enterrado la primera vez, los wayuú realizan un segundo y definitivo entierro de su familiar por línea materna.

Por tanto, el territorio es para los wayuú

“El lugar en donde se desenvuelve, día por día, el entramado de sus relaciones individuales, colectivas, interclaniles, e interculturales; que es posesión de todos cuando se comparten, regulan y controlan sus riquezas naturales; y que es posesión del eirrükü (clan) cuando es por todos asumido que hay un cementerio, unos animales, y hombres y mujeres que defenderán y perpetuarán el clan (KLIMAFORUM LATINOAMERICA NETWORK, 2015)”.

De acuerdo con lo anterior, la falta de acceso a zonas sagradas como los cementerios, en este caso debido a la actividad minera, afecta sensiblemente la vida espiritual y la concepción territorial de los wayuú.

Para comunidades afrodescendientes del Chocó también se presentan situaciones que significan una ruptura en el desarrollo de prácticas sociales, rituales y ceremoniales en los territorios en los que la minería tiene incidencia. Este fenómeno se manifestó tras la llegada de las retroexcavadoras a mediados de la década de 1980⁹. En ese momento se estableció una nueva forma de negociación de

⁸ Véase la sección de Limitación para el uso y disfrute de territorios étnicos y prácticas ancestrales por actividad minera y desarrollo de infraestructura del capítulo de derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta para la narrativa del caso.

⁹ En el departamento del Chocó la práctica de la minería artesanal ha sido una tradición de sus habitantes. Sin embargo, la primera etapa de explotación masiva de oro y platino, vino de la mano de la empresa Chocó-

la explotación de los terrenos y permitió una participación de los condueños¹⁰ en las decisiones sobre las zonas de explotación y la repartición de las ganancias.

La instauración de esta práctica se tradujo en quebrantamientos en la estructura del tejido social de algunas regiones. En Condoto, la repartición de las ganancias obtenidas promovió las disputas familiares. Eso produjo graves afectaciones al territorio, teniendo en cuenta que en estas comunidades afrodescendientes el sistema de propiedad está en la familia¹¹, que es considerada el ente jurídico poseedor de esta porción de terreno (CASTILLO, 2013).

Por otro lado, la instauración de la minería de retroexcavadora, primero sobre las orillas de los ríos, y después sobre el cauce mismo, ha afectado la relación que las comunidades afrodescendientes establecen con estas fuentes hídricas. Para estas comunidades los ríos son fuente de alimentación, transporte, esparcimiento, lugares de encuentro, entre otros.

Por una parte, en Chocó la minería de retroexcavadora ha hecho que el color del agua se transforme, debido a las grandes cantidades de material particulado o sedimentos acumulados. También se han alterado los cursos de los ríos limitando el acceso a las comunidades. Como consecuencia de ello, actividades de subsistencia como la pesca y el abastecimiento de agua quedan impedidas.

De igual manera, se pierde el río como espacio de recreación, encuentro e intercambio cultural de las comunidades cercanas:

“Cuando éramos pequeños íbamos todos los domingos a comer sancocho y bañarnos en el río con la familia, las mamás lavaban echaban chisme, se cantaba o sólo jugábamos. Luego ya más grandecitos íbamos con las amigas y los pelados con los amigos,... y entonces, era ahí a ojos del río que uno comenzaba a tener sus amores. Hoy ya no hay río, ahora los jóvenes se la pasan en las discotecas, borrachos y las muchachitas coqueteándoles a los recién llegados”.

En Istmina los actores vinculados a la actividad minera, al contrario de lo referido anteriormente, propiciaron el acceso al cementerio de una vereda. Unos retreros¹² colaboraron con la construcción de un camino hacia el cementerio que anteriormente solo podía visitarse por medio de una trocha que era de difícil tránsito.

Pacífico. La empresa no negoció con quienes habitaban el territorio explotado. Al contrario, impusieron sus políticas, que a su vez fueron avaladas por el Estado colombiano.

¹⁰ Los condueños son los dueños de los terrenos donde se realiza la exploración y explotación minera. Su función consiste en realizar la negociación con los mineros, administrar, y distribuir el porcentaje de renta por el alquiler del terreno. (QUINTO, 2013)

¹¹ “La familia minera refiere a dos ámbitos sociales, el primero describe la unidad doméstica, la cual casi siempre coincide con la familia nuclear formada por el padre, la madre y sus hijos, aunque también puede incluir abuelos, *entenados* (niños adoptados), sobrinos o primos. Incluye los parientes conectados por filiación y por afinidad. El segundo ámbito describe el grupo de descendencia al cual pertenece el condoteño. Esta acepción refiere solo a los parientes consanguíneos, los cuales trazan su filiación hacia un ancestro que se denomina tronco. El representante vivo de ese tronco, o que murió recientemente y por tanto se ha convertido en un ancestro focal, es el *ñunco*”. (CASTILLO, 2013).

¹² Propietarios de retroexcavadoras

Por otra parte, en un municipio del Macizo Colombiano caucano campesinos e indígenas que practican la minería han sufrido fuertes transformaciones en sus prácticas.

Hasta hace 3 o 4 años, previo a la llegada de las retroexcavadoras, la tradición minera incluía a niños, mujeres, familias completas que vivían del barequeo en la zona. Esta resultaba ser una actividad itinerante, pues en verano bajaban al río a barequear, en tanto que en invierno, cuando el río sube, trabajan en agricultura, casi siempre en cultivos de café en otras regiones del Cauca o Huila¹³.

Las personas de la región relataron que en 2013 unas retroexcavadoras obtuvieron el permiso de extraer material de arrastre del río, pero en realidad trabajaban 24 horas al día, sacando material de día y oro en las noches. La intensidad de la explotación con retroexcavadoras transformó por completo el paisaje en muy poco tiempo. La entrada de maquinaria pesada afectó seriamente el río: *“no queremos maquinaria pesada porque destruye el río”*. Como consecuencia de ese proceso se modificó el cauce natural: *“Aplanaron el río, lo dejaron sin piedras ni distintos niveles de profundidad que son necesarios para barequear, además se llevaron todo el oro y nos dejaron casi nada”*. En medio de la explotación, los retreros destruyeron una cancha de fútbol, el único espacio de sociabilidad y ocio de la vereda. En la actualidad los habitantes de la zona se organizaron en un cabildo y prohibieron la entrada de las retroexcavadoras por medio de una acción de hecho.

Una afectación similar se presentó en El Bagre, Antioquia. Según uno de los pobladores de una vereda *“la mina se comió el cementerio y la cancha de fútbol”*. Los habitantes de la región mostraron su preocupación por la destrucción de su territorio y la falta de espacio de esparcimiento. En esa zona, además, la alta incidencia de GAI y BACRIM¹⁴ es un riesgo adicional. Los jóvenes pueden ser reclutados por estos grupos o, en algunos casos, dedicarse al sicariato. A lo anterior se le suma una fractura de los vínculos familiares por distintas razones y una alta migración por motivo de la minería. Es por eso que el tejido social de estas comunidades se ha fracturado de forma importante.

En el municipio de Remedios también se han afectado espacios de sociabilidad y rituales: la iglesia del pueblo se hundió por causa de una explotación minera que según los habitantes del pueblo tenía la bocamina dentro de la estación de policía.

Las fiestas tradicionales son otro aspecto sobre el que se evidenció un impacto con relación a la vida cultural de las comunidades en entornos mineros. En La Jagua de Ibirico, Cesar, una líder comunitaria afirmó que:

“Esta era una zona de agricultura y ganadería. Teníamos en septiembre el Festival Agrícola, Ganadero, y Fiestas Patronales San Miguel de Arcángel. Ahora esa cultura nuestra, esa tradición se acabó. Ahora es Festival Minero de La Jagua de Ibirico. Nos cambiaron

¹³ La llegada de las retroexcavadoras y el desplazamiento del barequeo como forma de minería artesanal, también ocurre en comunidades afrodescendientes del departamento del Cauca. Para profundizar en este tema se recomienda visitar el siguiente enlace: <http://www.las2orillas.co/las-mujeres-del-oro-en-el-cauca/>

¹⁴ Para un mapa que cruza la presencia de GAI y BACRIM véase el capítulo de Libertad y Seguridad.

absolutamente todo, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras fiestas, todo, todo, nos lo cambiaron”.

En ese mismo departamento se han presentado casos en los que los niños, niñas y adolescentes han visto limitado su posibilidad de interactuar entre sí y de acceder a espacios de recreo. De acuerdo a un informe elaborado por PAS y Terre des Hommes (TERRE DES HOMMES, 2015) *“las áreas de recreación y sitios de juego son prácticamente inexistentes”* en la comunidad de El Hatillo. En el informe también se consignó que debido a situaciones ambientales precarias se han perdido zonas verdes afectado el acceso a cuerpos de agua en los que los niños y niñas jugaban con sus familias. Al ser una comunidad en proceso de reasentamiento, el Estado también ha reducido la inversión en la comunidad.

En este departamento, como se vio en el caso anterior, el desvío, reducción o desaparición de cuerpos de agua es un factor importante de afectación a espacios de sociabilidad. El desvío del río Calenturitas ha imposibilitado la realización de prácticas culturales ligadas con el río. Los baños en el río implican espacios de socialización y esparcimiento en el que tomaban lugar actividades como los cantos del Manduco. Estos cantos constituían un espacio restringido a las mujeres de la comunidad en el que además de constituir parte de la tradición oral operaba también como un espacio de comunicación y resolución de conflictos.

Los partos sobre las laderas de los ríos a cargo de parteras es otra tradición que se ha perdido. La ausencia de las condiciones de salubridad necesarias impide la continuación de esta tradición y pone en riesgo la pérdida de los conocimientos tradicionales de la parteras (CINEP, PAS & ASK, 2014).

El líder de una comunidad étnica del departamento manifestó que *“las afectaciones a los recursos hídricos han llevado a la desaparición de sitios sagrados para la comunidad. [menciona varios pozos]. También han desaparecido otros pozos donde se lavaba ropa o se recogía agua”*. Según su interpretación de la situación el Estado y las empresas impulsan una noción de desarrollo que no es compatible con la que tienen las comunidades de la región: *“hablan de desarrollo pero, ¿cuál desarrollo?. Un desarrollo que no le conviene a los grupos étnicos. Se vivía mejor antes, cuando se vivía de la agricultura”*.

Esta divergencia de miradas es central para la discusión sobre el derecho a la vida cultural. ¿Cómo integrar las ideas de desarrollo de las poblaciones que se ven afectadas por los procesos de modernización y la implementación de megaproyectos de distinta índole a estas iniciativas? La problemática debe ser abordada de forma participativa por los grupos de interés vinculados a la minería.

Flujos migratorios no planeados que afectan prácticas culturales de especial importancia

Las limitaciones para el **ejercicio del derecho a participar en la vida cultural** que se señalarán a continuación responden a 3 tipos de migraciones:

- ❖ Migraciones asociadas a la búsqueda de oportunidades en la industria extractiva
- ❖ Reasentamientos involuntarios a raíz de la actividad minera

❖ otras migraciones involuntarias en contextos mineros

En los casos en que sea necesario se planteará de manera explícita la diferencia entre los impactos en escenarios de pequeña minería y en escenarios de minería empresarial a gran escala.

En términos cuantitativos¹⁵, para los casos de municipios de explotación de oro y carbón, se observa un crecimiento significativamente mayor en la población de los municipios mineros en comparación con el promedio del grupo de municipios de control entre comienzos de la década de 1990 y 2014. En particular, el crecimiento poblacional ha sido 36% mayor en municipios con minería de oro en municipios con minería de oro, 46% mayor para los productores de carbón en el interior, y 88% mayor para los productores de carbón en Cesar y La Guajira, todos los casos respecto a los grupos de municipios de comparación. En términos absolutos, esto implica que respecto a los municipios de control, que tenían patrones poblacionales similares alrededor de 1993, hoy se encuentran cerca de 8 mil personas más en los municipios con minería de oro, 7 mil personas más en los municipios con minería de carbón en el interior, y 19 mil personas más en los municipios con minería de carbón en Cesar y La Guajira. No se observan diferencias significativas entre los municipios productores de materiales de construcción y su grupo de comparación.

Los impactos identificados durante la investigación cualitativa se reflejan principalmente en la fragmentación del tejido social y en las limitaciones para el desarrollo de prácticas culturales y tradicionales. Los dos tipos de impactos están en estrecha relación pues la desestructuración de redes familiares y comunitarias impide la construcción de relaciones necesarias para la permanencia de la población en sus territorios y la pervivencia de prácticas culturales e identitarias.

8. Migraciones asociadas a la búsqueda de oportunidades en la industria extractiva

Las expectativas de generación de ingresos producidas por la llegada o aumento de la actividad minera promueven migraciones de contextos rurales a urbanos en una misma región y de una región a otra para vincularse a la industria extractiva. En otros casos, como ocurre con la explotación aluvial de oro, se presenta una movilidad constante de los pequeños mineros pues se trasladan de un lugar a otro según la presencia del mineral.

- *Minería a gran escala*

De acuerdo con un funcionario del municipio de Hatonuevo, en La Guajira, el crecimiento demográfico del municipio por la llegada de la minería le permitió pasar de ser un corregimiento a un municipio. Sin embargo, no se contaba con la infraestructura adecuada para enfrentar este crecimiento. Pone como ejemplo el acueducto municipal, que estaba diseñado para abastecer a los

¹⁵ Los datos cuantitativos que se presentan a continuación fueron incluido también en el capítulo correspondiente al derecho a la educación. Se retoman en este capítulo debido a que ilustran el tamaño de la problemática y los consecuentes impactos en el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural.

8.000 habitantes que había anteriormente y que hoy en día debe suministrar agua a aproximadamente 28.000 personas.

Según este funcionario, aproximadamente el 40% de la población del municipio es flotante y la llegada de personas de diferentes regiones del país ha llevado a una pérdida de las costumbres propias. La convergencia de diferentes formas de pensar y costumbres generan alteraciones en el orden público en la medida en que no hay un entendimiento común, además de haber un aumento en los cordones de miseria del municipio.

Estos impactos sobre la demanda de servicios públicos, la aparición de problemáticas sociales y la alteración de prácticas culturales también fue señalada por actores institucionales y comunitarios en los municipios de Barrancas en La Guajira, La Jagua de Ibirico y El Paso, en el Cesar.

Dentro de las principales problemáticas sociales mencionadas se encuentran la aparición de fenómenos como la delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas – SPA, y la prostitución que en el caso de La Guajira, según señalaron actores entrevistados, es ejercida por mujeres de la zona, y otras provenientes de Venezuela y es demandada por trabajadores mineros. También se presentan otras problemáticas que afectan de manera específica a niños, niñas y adolescentes y que se describirán más adelante.

Para el caso de materiales de construcción, en algunos municipios de Boyacá y Cundinamarca, la minería también ha dado lugar al desarrollo de nuevas prácticas sociales asociadas a la violencia, drogadicción, prostitución e indigencia. Si bien en este sector la minería a gran escala no es representativa, durante el trabajo de campo se encontró un caso particular en el Tunjuelo, Bogotá, donde líderes comunitarios sostuvieron que grandes empresas mineras ocasionaron un fenómeno migratorio de indigencia y familias en condición de pobreza extrema. Tal y como lo mencionó un líder comunitario:

“Pues nosotros sostenemos que por ejemplo estos personajes de la indigencia o de los habitantes de la calle que llegaron fue de un momento a otro llegaron por la minería y eso nos ha traído un conflicto, y sospechamos que se mueven intereses, políticos o económicos o sociales, que raro no? Al pie de la minería, es lo que dice el dicho: *donde hay minería hay pobreza* y eso nos ha traído una cantidad de problemas. Porque esta población, de indigencia atracando, robando a los niños, cometiendo violaciones carnales, bueno toda esas cosas...”

Allí mismo, estos líderes comunitarios atribuyen a grandes empresas el detrimento de la calidad de vida en la región, argumentando que los niveles de drogadicción, prostitución y violencia son cada vez más visibles a causa de la permanencia de empresas mineras en la zona. En palabras del líder comunitario:

“la calidad de vida ha disminuido desde la lógica de vivir tranquilo y feliz en relación con el otro (...) Acá en el barrio hay niveles muy diversos de violencias. La gente se ha tenido que vincular a acciones de sobrevivencia económica que el Estado las califica como ilegales y

nosotros las calificamos como soluciones prácticas y dolorosas para poder sobrevivir. La minería ha aumentado la drogadicción, la prostitución y el pandillaje.”

Finalmente, en los contextos de explotación de carbón a gran escala, además de la llegada de gente proveniente de otras regiones, se producen migraciones internas, principalmente de población rural a cascos urbanos. Esta migración ha representado una ruptura en la transmisión intergeneracional de conocimientos, como ocurre con la comunidad del Boquerón en el departamento del Cesar. La posibilidad de una inserción en el mercado laboral de la industria minera, llevó a que algunas de las familias fundadoras y primeros ocupantes se trasladarán a cabeceras municipales, rompiendo así la transmisión de saberes y tradiciones a las poblaciones más jóvenes (GONZALEZ, 2013).

- *Minería a mediana y pequeña escala*

En el departamento de Boyacá, en las épocas de bonanza del carbón se presenta la llegada de mineros de departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Antioquia, entre otros. Según refirió un actor institucional del municipio de Samacá, se trata de personas que traen otras costumbres y presentan altos índices de consumo de alcohol, lo que lleva a que se generen conflictos con la población local.

En el departamento de Antioquia la criminalización de la actividad minera, se ha traducido en la migración de la actividad a otras zonas donde previamente no existía la minería. Ejemplo de ello es el caso de Buriticá, municipio que desde el 2013 ha hecho énfasis en el problema del alza poblacional que ha sufrido debido a las olas migratorias que se han asentado en su territorio, situación que llevó a la declaratoria de Calamidad Pública de 2013 por la cual se reasentaron 1294 familias y otras fueron desplazadas. Estas poblaciones migraron hacia municipios aledaños no mineros como Santa Fe de Antioquia, Giraldo, Cañas Gordas, Anzá, Sopetrán, entre otros. La llegada de estos mineros a dichos municipios, ha alterado las costumbres de estos lugares, tal como lo expresa un entrevistado, “*en estas regiones de costumbres, las costumbres se vuelven ley y con la llegada de los nuevos (los mineros), esas costumbres se cambian y entonces las leyes también, ¿no?*”

Para el sector de materiales de construcción, en algunos municipios ocurren fenómenos migratorios de personas que llegan a trabajar en minería instaurando nuevas prácticas sociales. Tal es el caso del municipio de Nemocón, Cundinamarca, donde funcionarios del gobierno local, expusieron que quienes se han dedicado a la minería en el municipio vienen de otros municipios de Boyacá como Chiita y Jericó, Así lo manifestó un funcionario público:

“Nemocón tiene otro municipio dentro de él. Porque todas estas personas que se dedican a la minería llegaron de Chita y de Jericó hace unos 25 años. Ahí formaron sus núcleos. Todos son familias. Es un pueblo dentro de otro pueblo, entonces tienen una idiosincrasia diferente a la nuestra”.

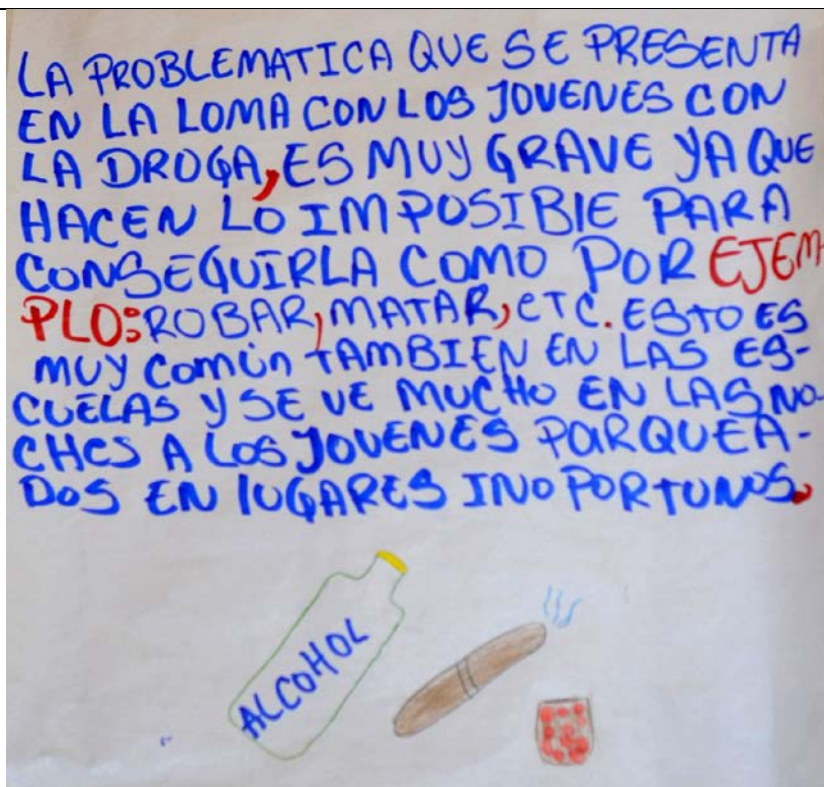
Según los miembros del gobierno local, estas personas, que no son nativas del municipio, se han generado problemáticas sociales por no ser oriundos del territorio y por dedicarse a prácticas mineras en donde las dinámicas comerciales y relacionales entre los miembros de la comunidad se asocian a factores como el alicoramiento y la violencia:

“Las ganancias que reciben por el ladrillo se destinan en gran parte para la cerveza. Los hombres alicorados buscan a las mujeres y dejan varias familias abandonadas. Además de abandono hay maltrato físico, verbal y psicológico, a mujeres, niños y personas a su alrededor. Los abusos sexuales son muy generalizados, es normal ver a la hija con el padrastro y estas dinámicas vienen de Jericó. [la vereda] se reconoce por ser un lugar inseguro” (Entrevista a funcionario del gobierno local del municipio)

En esta vereda grandes familias compuestas trabajan en chircales para la producción del ladrillo. Tal y como lo manifestaron actores del gobierno local, la mayoría de los conflictos se relacionan con temas como violencia intrafamiliar, trabajo infantil, inasistencia alimentaria, lesiones personales en riñas y abusos sexuales.

Limitaciones para el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural de niños, niñas y adolescentes en contextos mineros con alto crecimiento demográfico

En todos los departamentos, actores institucionales y comunitarios resaltaron la aparición de fenómenos como trabajo infantil, explotación sexual con fines comerciales, consumo de SPA, embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Si bien no hay evidencias que permitan demostrar que estas enfermedades son consecuencia directa de la actividad minera, señala un actor institucional del municipio de Hatonuevo, se establece esta relación debido al alto flujo de población, principalmente hombres, que llegan al municipio sin sus esposas para trabajar o buscar trabajo en la mina.



Cartelera realizada en taller con jóvenes de La Loma en el municipio de El Paso, Cesar

En Nemocón, Cundinamarca, actores institucionales también atribuyen estas problemáticas a las costumbres de personas que no son nativos del municipio y que viven en veredas de actividad minera:

“La situación de los jóvenes es inmanejable por la cultura, los padres de familia son muy machistas, les brindan herramientas a los jóvenes para que se crean mejores, toman cerveza y siguen el mismo círculo vicioso de sus padres, de tener varias mujeres, por eso hay mucho embarazo a temprana edad”.

En el Cesar, algunos actores comunitarios señalaron que se han elevado los casos de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, refiriendo que aproximadamente el 75% de los casos del Cesar están en La Jagua de Ibirico, La Loma, Chiriguaná y El Paso. Los entrevistados, asocian estas problemáticas a la ausencia que espacios de esparcimiento y recreación para los jóvenes, así como a la búsqueda de una salida económica. Según dijeron muchas adolescentes buscan quedar en embarazo con *drummeros*¹⁶ porque saben que tienen más recursos. Otra persona señaló que *“antes las adolescentes deseaban tener hijos con los soldados, hoy en día, lo buscan es con los mineros”*.

El corregimiento de la Loma, del municipio El Paso, es representativo en términos del acelerado crecimiento demográfico y la aparición de problemáticas sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente se trata de situaciones que no se reportan, como el trabajo infantil y la explotación sexual, lo que dificulta la actuación institucional.

El **trabajo infantil**, de acuerdo con el ICBF, es visto por algunas comunidades del Cesar como un rasgo cultural, muchos niños y niñas estudian y trabajan, pues “...el trabajo dignifica”. Además, La falta de recursos en las familias es un factor de riesgo que aumenta el trabajo infantil. En la Loma hay muchos niños y niñas que permanecen en calle dedicados a la venta de diferentes productos. Esto deriva en otras situaciones de riesgo para esta población como el consumo de SPA y la vinculación a redes delincuenciales.

Para enfrentar la problemática de trabajo infantil en el corregimiento de La Loma, el gobierno departamental, el ICBF y algunas organizaciones, adelantan estrategias que fueron desarrolladas en el capítulo correspondiente al derecho a la educación, pues se trata de estrategias que hacen énfasis en la escolarización de esta población y el acompañamiento a sus familias.

Para el sector de materiales de construcción, el trabajo infantil fue visibilizado por los funcionarios públicos del municipio de Nemocón, Cundinamarca. Allí argumentaron que los pequeños productores mineros que han llegado de Jericó y Chita, Boyacá, no conciben el trabajo de niños y adolescentes como trabajo infantil, ya que la colaboración de toda la familia en los chircales de las casas hace parte de la tradición y la cultura de esta población. Por su parte, un líder comunitario de la vereda expuso que:

¹⁶ En la región se refieren a los trabajadores de los diferentes proyectos mineros como *drummeros*, sin importar con que empresa trabajen.

“Tanto las mujeres como los hijos trabajan en torno a la minería. Los niños estudian y quedan libres después del mediodía, por lo que ayudan en el trabajo. Mi hijo de 17 años valida el colegio el fin de semana y entre semana trabaja y también algunas personas que vienen de otros lados del país ponen a trabajar a niños”.

Ante esta situación, la Comisaría de Familia del municipio desarrolló, en el 2014, un estudio en convenio con Compensar para diagnosticar el trabajo infantil en la vereda minera del municipio:

“La principal razón que se encontró es el dinero, lo hacen porque les pagan, es una problemática social por bajos recursos, familias grandes compuestas y violencia intrafamiliar. [La vereda] tiene mucha población flotante, esa es la cultura de Jericó, es dura de manejar, tienen otra cultura”.

En total, se identificaron diez casos en los que los niños trabajaban en horario extraescolar; todos los casos fueron investigados, a partir de lo cual se realizó un trabajo mancomunado con los padres y la alcaldía local para que los niños dejaran de trabajar en la actividad minera. (Considerada una de las peores formas de trabajo infantil).

Otra problemática que afecta a la población menor de edad en todos departamentos que hicieron parte del estudio, es la **explotación sexual** con fines comerciales (Ver ~~capítulo de derecho a salud y ambiente sano~~). Al igual que lo que ocurre con respecto al trabajo infantil, no hay registros del tamaño de la situación pues hace parte de redes ocultas que lo vuelven un problema invisible. Tampoco se presentan denuncias por parte de quienes son víctimas de este delito o de sus familiares pues estos últimos son, en ocasiones, quienes facilitan su ocurrencia.

En La Loma, Cesar, se identificó que una de las formas en que se lleva a cabo el delito de explotación sexual de menores de edad es a través del servicio de lavandería prestado por integrantes de la comunidad a contratistas de las empresas mineras. Según narró una funcionaria del departamento, los padres de familia estaban haciendo negocios que sin saberlo, se prestaban para la explotación sexual de las niñas. Por ejemplo, prestaban el servicio de lavandería a contratistas de la mina (principalmente a contratistas temporales de otras regiones), y utilizaban a las niñas o niños para llevar la ropa a los clientes, momento en el que se presentaba el delito. De acuerdo con esta funcionaria, las familias no enviaban a las niñas conscientes del riesgo, por lo que las estrategias de prevención incluyen el trabajo con el núcleo familiar.

La identificación de la problemática ha llevado a que se desarrollen campañas de atención y prevención por parte del gobierno departamental, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y sindicatos. Estos últimos se apersonaron de la situación y armaron campañas para visibilizar la problemática dentro y fuera de la mina. Desde la gobernación, en compañía del ICBF se trabajaba en colegios y comunidades fortaleciendo el tema de la denuncia.

En otros municipios del departamento del Cesar se han presentado otras dos formas en las que se desarrolla este delito. Antes de que se utilizara el tren como medio para transportarlo, el carbón era trasladado desde los proyectos mineros hasta el puerto de embarque en tractomulas. En ese momento se presentaba lo que se conoce en la región como “*las toca- llantas*” y “*los terneritos*”. Se

trataba de niñas y niños que eran abusados sexualmente por los conductores de estos vehículos. El cambio de medio para transportar el carbón y los esfuerzos de diversas instituciones, incluyendo organismos internacionales (UNICEF, OIM), llevó a una disminución de la grave problemática, sin embargo, han quedado secuelas, en los niños y niñas de estos municipios. Desafortunadamente, en la actualidad, la construcción de la Ruta del Sol está generando la reaparición de la problemática.

Ante esta situación, la empresa sostuvo que al interior de la compañía han llevado a cabo sesiones de sensibilización y de prevención, procurando que los trabajadores no fomenten actividades como la prostitución. Además, con autoridades han hecho recomendaciones al ICBF y a la Procuraduría para que en las poblaciones del área de influencia haya un mayor control sobre estas problemáticas sociales.

Para el caso de la extracción de oro, en los departamentos estudiados (Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño) el fenómeno de explotación sexual comercial y el alto número de madres solteras, han sido fenómenos acarreados por la llegada de mineros a estos territorios.

“A Itsmina [Chocó] llegan ciertos brasileiros que además de las afectaciones sobre le territorio por el manejo que se tiene con las máquinas, a nivel social compran amor y son transmisores de ETS”.

La periodista Jineth Bedoya, en un artículo titulado *Campamentos de explotación sexual en zonas mineras* reporta que “*alrededor de las minas ilegales, las que no están tituladas, los fines de semana se levantan campamentos para albergar a las niñas y jóvenes que son ofrecidas en prostíbulos móviles*” (BEDOYA, 2013). Se trata de niñas y jóvenes que son trasladadas desde otras regiones para ser explotadas sexualmente. Paradojicamente, esta situación ha llevado a que se reduzca la explotación de niñas, adolescentes y jóvenes de la región. Así lo expresó un líder de un Consejo Comunitario:

“Ahí hay un fenómeno social muy interesante (con la prostitución), con las muchachas que vienen de afuera y con las muchachas de aquí. A las muchachas de aquí les empiezan a gustar los nuevos y sumado a eso hay mucha afluencia de dinero y las muchachas de aquí no tenían el conocimiento de ‘mi cuerpo por plata’, pero con tanta gente y tanta plata se iban corrompiendo de a poquito. Sin embargo, cuando penetran las prostitutas, ellas regulan y estabilizan un poco porque si no hubiera sido un impacto mucho más fuerte. Llegaron entre 200 y 300 mujeres. A pesar de que quedaron muchas muchachas embarazadas, no fue más grave que las mujeres que llegan”.

Además del trabajo infantil y la explotación sexual con fines comerciales, los niños, niñas y adolescentes se enfrentan al acceso y consumo de SPA en los contextos con alto crecimiento demográfico. Por ejemplo, en el corregimiento de La Loma, algunas adolescentes que viven en este corregimiento manifestaron que es común ver gente consumiendo droga en espacios públicos, además que las drogas “*las venden en la calle y en todo lado*”. También señalaron la falta de espacios

para el esparcimiento y recreación que les permitan tener otro tipo de actividades y que posibilitan que muchos adolescentes recurran a las drogas para divertirse.

Finalmente, los flujos migratorios en contextos de mineros también han llevado a una reconfiguración de identidades debido a la aparición de nuevos referentes para la población adolescente y joven.

Por un lado, en los escenarios donde se desarrolla la minería a gran escala, como Cesar y Guajira, hay cambios en la proyección de futuro de la población joven. Como se mencionó en el numeral anterior (Ver capítulo de derecho al trabajo), esta población ha dejado a un lado las prácticas de subsistencia propias de una tradición agropecuaria para vincularse con la actividad minera que les permite generar mayores ingresos.

Por su parte, en los contextos de explotación de oro a pequeña escala y de manera informal, la llegada de nuevos pobladores a contextos de pobreza, sumados a los beneficios económicos de la actividad minera han generado lo que se puede denominar como la *cultura del dinero fácil* (Ver capítulo de derecho a la educación). Este ha sido un fenómeno que recubrió todas las esferas de la sociedad. En el caso de la población infantil, esto se tradujo sobretudo en deserción escolar (Ver capítulo de derecho a la educación), como lo narra una profesora en el Cauca:

“En contextos mineros hay mucha deserción escolar, los jóvenes que asisten lo hacen para que no les quiten el subsidio de Familias en Acción (...). Los padres de todos los alumnos trabajan en minería, hombres y mujeres (...). En el hogar, los jóvenes quedan abandonados, desatendidos. Los jóvenes se van a trabajar en las minas en vacaciones, comienzan a ganar mucho dinero, comienzan a consumir alcohol, gastar en fiestas y comienza el desapego familiar”.

9. Reasentamientos involuntarios por la actividad minera

La comprensión del territorio como el escenario donde se tejen relaciones económicas, sociales, culturales y políticas que configuran una identidad colectiva es el punto de partida para comprender los impactos que los reasentamientos involuntarios, y otro tipo de migraciones colectivas, tienen sobre el ejercicio del derecho a participar de la vida cultural.



Para ilustrar las afectaciones a este derecho a raíz de los reasentamientos involuntarios por la actividad minera se retoman los casos del departamento de La Guajira, que ya fueron expuestos en capítulos anteriores (Ver derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta, derecho a la educación y derecho a la libre circulación). En este sentido, este capítulo no recoge la historia ni las controversias alrededor de los reasentamientos sino que se centra en los impactos en el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural.

Los casos del departamento del Cesar no se toman en consideración en este apartado debido a que dos de ellos no se han llevado a cabo aún (El Hatillo y Boquerón)¹⁷ y el tercero (Plan Bonito) no fue un reasentamiento colectivo sino un proceso de negociación individual en el que cada una de las familias que hacían parte de la comunidad se trasladó de manera independiente. Sin embargo, hay que resaltar que esta negociación individual fragmentó completamente a la comunidad que hoy se encuentra dispersa por diferentes municipios y corregimientos del departamento. En este sentido, los impactos en términos de rupturas del tejido social que se describirán para otros casos son totalmente pertinentes para la comunidad de Plan Bonito¹⁸.

¹⁷ Los casos de estas dos comunidades están incluidos en el análisis sobre restricciones o impedimentos a formas de vida tradicionales o tradiciones culturales desarrollado en el numeral 1 de este documento. También han sido abordados en otros capítulos de este estudio.

¹⁸ En esta misma línea se debe mencionar que en el departamento de La Guajira, previo a los procesos de reasentamiento actuales que se rigen por normas internacionales como los lineamientos del Banco Mundial, hubo situaciones de desplazamiento o desalojo de comunidades (ver capítulo sobre el derecho a la libre circulación y permanencia), cuyos impactos sociales y culturales aún están vigentes. En algunos casos como las comunidades de Tabaco y Manantial, los impactos culturales ocurren principalmente a la dispersión de la población que llevó a la pérdida de una forma de vida colectiva. Otros casos, como el de la comunidad de Oreganal consistió en la entrega de casas y, para algunas familias, compensaciones económicas, más no un acompañamiento que permitiera mantener la cohesión social y las formas de vida colectivas. Hoy en día,

Durante el trabajo de campo se entrevistó a representantes de 3 comunidades reasentadas en la Guajira para la identificación de los impactos que se desarrollan a continuación¹⁹. Los elementos que se pueden destacar son la fragmentación del tejido social derivadas de las estrategias de negociación utilizadas por las empresas mineras y la pérdida del territorio y de referentes identitarios, tanto para comunidades campesinas como para comunidades étnicas.

Fragmentación del tejido social

Dentro de los relatos de las comunidades que fueron reasentadas y aquellas que aún están en proceso de negociación, un elemento común es la mención a las estrategias de negociación adelantadas por las empresas mineras, donde varios aspectos de las negociaciones son individuales con comunidades con formas de organización, usos y costumbres colectivas. Esto promueve la división entre los miembros, clanes y familias de las comunidades y debilita su tejido social.

Por ejemplo, en algunos reasentamientos, el precio sobre el valor de la tierra fue acordado a partir de negociaciones individuales de cada familia. Esto ha generado grandes descontentos y conflictos entre las familias que sienten fueron engañadas al haber fijado un valor inferior que otros grupos familiares.

Varios líderes afirmaron que las empresas llevan a cabo acciones intencionadas que buscan fragmentar a las comunidades para lograr dichas negociaciones individuales. Entre las más comunes, está la expresión “*dividir la torta*” utilizada por las empresas para ilustrar cómo los beneficios para cada familia pueden aumentar en la medida en que se reduzca el número de familias beneficiarias.

También coincidieron en que el señalamiento de líderes comunitarios ha estado presente en momentos previos a las negociaciones, “*las multinacionales antes de empezar a negociar con la comunidad, lo que hacen es fragmentar a las comunidades. Los dividen con el tráfico de malas influencias, satanizando el nombre de los líderes que están representando a las comunidades*”. Otros incluso afirman que se presentan casos de compra de líderes “*La empresa llegó rompiendo el tejido social de las familias y los vínculos de éstas con los líderes comunitarios. Así lograron negociaciones individuales. Hubo compra de líderes y de familias, ofrecimiento de dádivas*” | “*Algunos líderes comenzaron a andar en Toyota*”.

Todas estas acciones traen consigo la ruptura de lazos de confianza y solidaridad que existían al interior de estas comunidades y que les permitían mantener relaciones de compadrazgo y desarrollar actividades colectivas en beneficio de toda la comunidad. Desaparecen así procesos comunitarios

algunas de estas comunidades están en negociaciones con la empresa para mejorar sus condiciones de vida y, en el caso de Tabaco, construir un nuevo asentamiento para su comunidad.

¹⁹ Además de estas tres comunidades también se encuentran las comunidades de Chancelta y Patilla cuyo proceso ha sido diferente de las anteriores. Una parte de estas dos comunidades aceptó los términos para el reasentamiento propuestos por la empresa y ya están ubicadas en un nuevo lugar. Pero otra parte de las dos comunidades no han aceptado los términos y permanecen en sus territorios de origen. Las entrevistas y ejercicios de cartografía social con estas dos comunidades se realizaron con quienes no se han reasentado, por lo que la información que brindaron no se incluye en este apartado. Sin embargo, los impactos descritos en el numeral uno de este documento aplican también para estas dos comunidades.

que se habían construido a lo largo del tiempo y que hacían parte de la vida cultural de estos asentamientos.

Pérdida del territorio y de referentes identitarios

Una vez ocurridos los reasentamientos, se presentan otra serie de impactos en el derecho a participar de la vida cultural, que se suman a la fragmentación social ya descrita. La base principal de estos impactos es la pérdida del territorio, que como se desarrolló anteriormente, no es sólo un espacio físico sino el conjunto de relaciones a través de las cuáles este espacio es habitado, pero sobre todo apropiado por las comunidades.

Los reasentamientos involuntarios de comunidades con tradiciones colectivas, así como otro tipo de migraciones involuntarias, como los desplazamientos forzados a causa del conflicto armado, representan la pérdida de un lugar y la ruptura con los espacios en los que se construye de manera permanente la memoria colectiva.

Las comunidades reasentadas en el departamento de la Guajira indican haber perdido el acceso a lugares de uso colectivo como ríos, pozos, jagüeyes, sabanas comunales, entre otros, que además de ser espacios de integración social son de alta trascendencia histórica dentro de la memoria de la comunidad. Así mismo, tanto en comunidades indígenas, como afrodescendientes y campesinas, el desarrollo de la medicina tradicional se ve afectada, pues señalan que ya no se cuenta con las mismas especies que tenían en el sitio de origen y no pueden aplicar el conocimiento acumulado al respecto.

Para comunidades étnicas, el reasentamiento también implicó una ruptura con prácticas religiosas y ceremoniales que se llevaban a cabo en lugares sagrados²⁰. Con respecto a las rupturas en estas prácticas, un representante de una comunidad Wayuú resaltó que los espíritus en el sitio de origen no son los mismos que en el nuevo lugar, por ello se tuvieron que realizar rituales de despedida del sitio de origen y para la llegada al nuevo lugar de tal forma que los espíritus de este nuevo escenario los recibieran.

Las personas mayores, actor fundamental en las comunidades indígenas, también se vieron afectados por este traslado, *“los viejos no están soñando. Han tenido que construir sus propias casitas de bareque para dormir allí porque ellos están perdidos, cuando se levantan no saben por dónde sale el sol”*.

Sin embargo, la realización de rituales en el nuevo lugar, y la adecuación de las viviendas, no es suficiente para reparar o compensar las pérdidas culturales y espirituales que representa la desterritorialización. Por ello, la comunidad indígena reasentada acordó con la empresa que algunos sitios sagrados en su lugar de origen, como el cementerio, fueran respetados por la empresa y la comunidad negoció el derecho a visitarlos. Hoy en día esta área es una zona de reserva forestal para la empresa y la comunidad tiene libre acceso a los sitios sagrados.

²⁰ En la sección 1 b de este documento, se presentó la importancia del cementerio dentro de la cultura wayuú y los impactos que puede tener la pérdida de acceso a estos. También se mostró la relevancia de los sueños dentro de su cosmogonía. Estos dos aspectos fundamentan la importancia de lo expuesto por esta comunidad dentro de los impactos culturales que ha significado el reasentamiento.

Las características físicas del nuevo asentamiento también ha afectado las prácticas culturales de las comunidades. Para empezar, los nuevos asentamientos son conjuntos cerrados donde las casas están una al lado de la otra a diferencia del lugar de origen donde cada familia tenía un espacio amplio que la separaba de las demás familias y les permitía tener huertas y cría de animales pequeños. Esto ha traído un aumento en los conflictos entre integrantes de la comunidad que sienten que ya no tienen privacidad y también ha producido una pérdida de usos y costumbres.

Reasentamiento de las Casitas en La Guajira



Ante la ausencia de terrenos para la siembra, las comunidades que viven allí han optado por cultivar en los espacios “verdes” al frente de su casa

Las formas de producción propias de las comunidades reasentadas se basan en el acceso a estas largas extensiones de tierra de carácter colectivo. Sin embargo, a excepción del caso de la comunidad indígena, las compensaciones en torno a la tierra no han contemplado el aprovechamiento que estas comunidades tenían sobre los terrenos de uso colectivo. La compensación se ha limitado a reconocer los terrenos que cuentan con un soporte jurídico de propiedad o tenencia así como las viviendas e infraestructura habitada.

Esto ocasiona que la vocación agrícola de las comunidades se vea comprometida y deteriorada. La reducción en la cantidad de tierra disponible no es el único factor que afecta el mantenimiento de la tradición agrícola de las comunidades y la estabilidad de la economía de subsistencia en que se soportan, pero sí ha demostrado ser un factor estructural en la forma en que las comunidades se acoplan al reasentamiento.

Finalmente, la ubicación de los reasentamientos también tiene implicaciones en la vida de estas comunidades. En todos los casos, los nuevos asentamientos están ubicados en cercanía a los cascos urbanos, lo que introduce dinámicas urbanas en la vida de comunidades rurales. La inserción de estas dinámicas externas a la comunidad, como el empleo y el desempleo, la aparición de

enfermedades relacionadas con el trabajo minero y la vida urbana, el pago de servicios públicos entre otros, han generado cambios sustanciales en la estructura social de la comunidad.

En una entrevista individual y en un taller de cartografía social representantes de dos comunidades señalaron que esta cercanía a cascos urbanos trae consigo riesgos para la población menor de edad. Principalmente identificaron la presencia de problemáticas como consumo de alcohol y drogas, presencia de pandillas, prostitución, violencia sexual y embarazo adolescente.

En síntesis, se puede decir que el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural se ve fuertemente amenazado con los reasentamientos involuntarios. Si bien se espera que constituyan oportunidades para mejorar la calidad de vida de los afectados, en la práctica muchos casos terminan por consolidarse como amenazas al tejido social o de las prácticas culturales de las la continuidad misma de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

La ausencia de un marco regulatorio y de proceso claros que integren a las normas nacionales los estándares lleva a que los proceso de reasentamientos sean muy vulnerables a coyunturas institucionales a capacidades locales y a voluntades sin que el proceso esté rodeado de garantías para ninguna de las partes. Todas las empresas entrevistadas en distinto grado su interés en que los procesos de reasentamiento se puedan llevar a cabo siguiendo estándares internacionales. Sin embargo el compromiso en ocasiones no se puede traducir en resultados por la ausencia de responsabilidades diferenciadas entre empresas e instituciones a lo largo de un proceso tan complejo como un reasentamiento. Valga por ejemplo el caso de los censos de población y prediales que es necesario adelantar en las etapas de construcción de los PAR (Plan de Acción de Reasentamiento) de acuerdo con el estándar 6 de la Corporación Financiera Internacional - CFI²¹. Sin embargo no existe un proceso definido ni mecanismos que obliguen a entidades públicas a adelantar dichos censos para ofrecer garantías y respeto a derechos de privacidad e intimidad. Se ven entonces las mismas empresas siendo una parte interesada conminadas a adelantar los procesos que serán bases de negociación y acuerdos.

Similar situación ocurre con las interacciones entre entidades nacionales como ANLA que registran como impactos los reasentamientos y los entes territoriales que deben acomodar a través de las interacciones con la empresa sus planes de ordenamiento territorial.

10. Desplazamiento forzado y despojo en contextos mineros

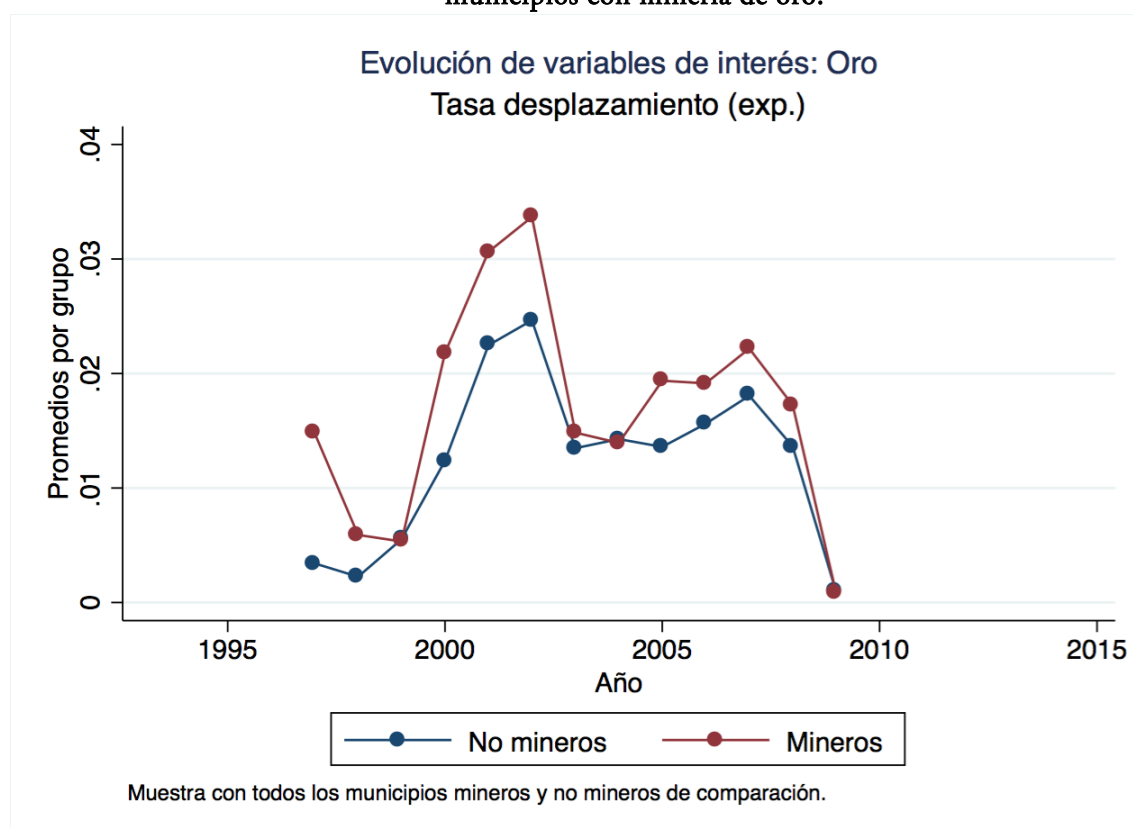
Además de las migraciones económicas y de los reasentamientos involuntarios por causa de la actividad minera y con participación de las empresas, hay regiones en las que han ocurrido otras migraciones involuntarias que traen consigo los impactos ya planteados. Esto ocurre principalmente en contextos de explotación de oro, donde la actividad minera convive con la presencia y accionar de grupos armados ilegales que han llevado al desplazamiento forzado de la población.

²¹ Ver explicación sobre la norma 6 de reasentamientos involuntarios en http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Documents.pdf?MOD=AJPERES

El análisis cuantitativo, por ejemplo, sugiere una posible asociación entre el desarrollo de actividades mineras y transformaciones o rupturas tanto sociales como culturales. Esto se manifiesta por medio de la tasa de desplazamiento tanto de expulsión como de recepción de la población. Estos flujos migratorios pueden transformar las prácticas culturales tradicionales y romper el tejido social de las comunidades desde donde se origina o hacia donde llegan los flujos poblacionales.

En particular, se observa que la tasa de expulsión por desplazamiento forzado es alrededor de 60% mayor en los municipios productores de oro, en comparación con los municipios de control. En términos absolutos, esto implica que mientras los municipios de control expulsaron en promedio 12 personas por cada mil habitantes por año en razón al desplazamiento forzado, la cifra es de 19 personas en los productores de oro. La figura XX hace evidente esta situación. Para los demás minerales la evidencia estadística no permite concluir que el desplazamiento forzado esté ligado a la actividad minera como una resultante de sus procesos. Lo anterior no quiere decir que en el departamento como El Cesar no hubieran ocurrido desplazamientos forzados en los municipios mineros, de hecho si ocurrieron. Es importante sin embargo distinguir entre impactos asociados a actuaciones individuales a impactos que sean una consecuencia inherente del subsector.

Gráfica 1 Evolución de la tasa de desplazamiento forzado (expulsión) en municipios con minería de oro.



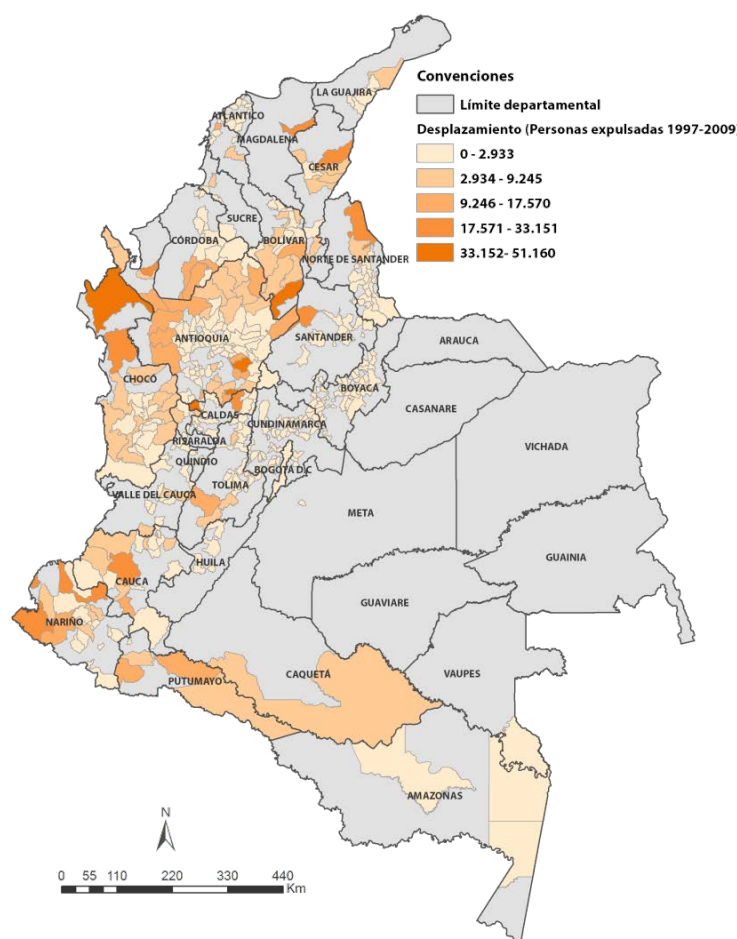
Fuente: cálculos propios con base en datos del Ministerio de Defensa Nacional

Respecto a la relación de los flujos de retorno de población desplazada y el desarrollo de actividades mineras, también se encuentra evidencia. En este caso para los municipios con mayor intensidad en

la producción de oro y de materiales de construcción. Para oro, mientras los municipios de control recibieron en 8 personas desplazadas por cada mil habitantes, los municipios con minería de oro no recibieron, en promedio, ninguna persona. Por su parte, el grupo de comparación de los municipios con minería de materiales de construcción recibieron en promedio 5 personas por cada mil habitantes. En contraste, los municipios mineros recibieron en promedio 2 personas por cada mil habitantes.

Para los municipios productores de carbón en el interior del país, y carbón en Cesar y La Guajira, no se observan diferencias significativas respecto a los grupos de municipios de comparación. Es decir, en promedio, tanto municipios mineros como no mineros parecieran haber recibido población desplazada en la misma proporción.

Mapa 2 Personas expulsadas por desplazamiento forzado en el periodo 1997-2009 en municipios mineros



Fuente: Elaboración propia con información de títulos mineros del Catastro Minero Colombiano, producción minera del Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO e información de desplazamiento del CEDE, Uniandes

Siguiendo este orden de ideas, los obstáculos para ejercer el derecho a participar en la vida cultural por la presencia de actores armados puede evidenciarse en escenarios tanto individuales como colectivos.

En el departamento de Nariño, se encuentra que los impactos acarreados por la minería se presentan en dos escenarios. Por un lado, los hallazgos con la comunidad en la región andina, han demostrado que la pequeña y la mediana minería de carácter tradicional local, han traído beneficios a la comunidad. Pues, la distribución de las ganancias se ha direccionado en aras de reinvertir a favor de la comunidad por medio de construcción de carreteras, escuelas, puestos de salud etc.

En contraposición a este escenario andino, en el Pacífico nariñense la realidad es otra. En esta región, así como sucede en Chocó y Cauca, la llegada de la minería de retro- excavadora de la mano de actores foráneos a la región que establecen alianzas con grupos armados, ha generado una oleada de violencia, victimización y pobreza contra de la población civil. La implantación de este tipo de minería ha resquebrajado el tejido social por medio de la implementación de diferentes prácticas, *la plata fácil*, tal como lo explicaba un representante del Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA,

“Por ejemplo en San Sebastián, el jornal estaba entre 6,000 y 8,000 pesos. La minería puede dar hasta 60,000 pesos al día, imagínese el cambio de mentalidad de consumo que hay si cambian así sus ingresos en esas zonas donde existe alta vulnerabilidad y ausencia de alternativas”.

Lo anterior ha generado un conflicto entre organizaciones sociales de base con distintas posturas y la estigmatización, amenazas y asesinatos de defensores del medio ambiente (Ver derecho a la asociación y participación en la vida pública).

En el caso antioqueño durante una entrevista con un campesino y poseedor de un título minero de la región del nordeste, comenta cómo durante el 2002 se vio forzado a abandonar su tierra por presión de diferentes actores armados. Cuando el entrevistado vuelve a su lugar de origen para retomar sus actividades y prácticas campesinas y mineras, su título había caducado y sido adjudicado a tres empresas mineras.

Por otro lado, en un conversatorio en el norte del Cauca diferentes representantes de Consejos Comunitarios arguyeron que el incremento de las amenazas a líderes y desplazamientos selectivos, tienen como consecuencia la fractura de los procesos organizativos que dificultan la visibilización y reivindicación de los derechos y por ende la fractura del tejido social.

Al analizar los tres tipos de migraciones descritas con anterioridad se observa, por un lado, que la llegada de actores nuevos a una región irrumpe con las dinámicas locales de tipo económico, social y cultural y trae consigo nuevas formas de ser y habitar un territorio. Estas nuevas formas no siempre son compatibles con el contexto y sus actores por lo que las transformaciones que se desprenden pueden ir en detrimento del ejercicio de derechos de la población local, en este caso específico del derecho a participar en la vida cultural.

Por otro lado, la migración de comunidades enteras producto de los impactos de la actividad minera o de su expansión, así como de la presencia de grupos armados ilegales, ha afectado sustancialmente a comunidades con formas de vida colectiva. En los casos de las comunidades étnicas cuya cosmovisión está en estrecha relación con la tierra, la pérdida del territorio implica también la pérdida de referentes identitarios que aseguran la pervivencia de estos pueblos.

11. Insuficiente protección del patrimonio arqueológico

De acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural el patrimonio arqueológico forma parte del patrimonio cultural junto con otro tipo monumentos y lugares que *“tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico”* (UNESCO, 1972). Como tal, es deber de los Estados identificar, *“proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio”*.

En Colombia, de acuerdo con la Ley 1185 de 2008, los bienes de patrimonio arqueológico son considerados bienes de interés cultural del ámbito nacional y pertenecen a esta última. El artículo 6 de esta Ley, aclara que *“para la preservación de los bienes integrantes del patrimonio paleontológico se aplicarán los mismos instrumentos establecidos para el patrimonio arqueológico”*.

La institución encargada del manejo del patrimonio arqueológico es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, por lo tanto, en lo que concierne a la actividad minera, es la autoridad encargada de aprobar el Programa de Arqueología Preventiva que debe estar incluido en el estudio de impacto ambiental (ANM, sf).

Durante la investigación cualitativa, algunos actores entrevistados en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca dieron cuenta de daños que la actividad minera ha causado sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico en la región.

En la zona cercana a Villa de Leyva, en Boyacá se reportaron dos casos. Por un lado, en la región del Alto Ricaurte, actores comunitarios afirman que la extracción de materiales de construcción, específicamente la explotación informal de piedras de labor para procesos de urbanización y mejoramiento de vías del casco urbano, está poniendo en riesgo formaciones rocosas con pictografías y petroglifos, es decir, patrimonio arqueológico de la región. Una persona entrevistada, puso de manifiesto la contradicción que esto representa teniendo en cuenta la vocación e importancia cultural del municipio.

Por otro lado, en la vereda Ritoque, en el municipio de Villa de Leyva, la explotación de caliza por parte de empresas cementeras está afectando zonas de importancia paleontológica. Según señaló la persona entrevistada, depósitos de fósiles se están agotando por la extracción y molienda de los mismos. También mencionaron que al momento de aprobación de la licencia ambiental para las explotaciones no se reconoció la importancia arqueológica del lugar, ni se exigió una identificación amplia del patrimonio arqueológico de la zona. Un concepto emitido por la Universidad Nacional de Colombia el 7 de Febrero de 2012 señala que *“por la importancia paleontológica y patrimonial que*

representa la Unidad Geológica se recomienda solicitar a las cementeras que la están explotando, conceder zonas para exploración científica”, sin embargo, la persona que solicitó el estudio del material lo hizo a título personal, por lo cual no conoce los mecanismos para lograr que la recomendación de la universidad se tenga en consideración.

Otra zona de importancia arqueológica mencionada por actores comunitarios en Cundinamarca y que están en riesgo por la actividad minera son las Piedras de Tunjo en Mosquera. En Nemocón, que también cuenta con hallazgos arqueológicos importantes, actores institucionales entrevistados señalaron que el municipio no realiza veeduría sobre la explotación minera pero que saben que la empresa que hace presencia allí cuenta con Plan de Manejo Arqueológico.

En el departamento de Antioquia, en el municipio de Támesis una organización social señaló que no se quiere la entrada de la actividad minera a la región debido a las afectaciones a recursos hídricos que genera y por tratarse de una zona de vocación agrícola y riqueza arqueológica con potencial turístico.

En las otras regiones que hicieron parte del estudio la investigación cualitativa no arrojó información relacionada con las afectaciones al patrimonio arqueológico de la nación. Esto no significa que no las haya sino que se debe hacer una evaluación específica al respecto para poder conocer el estado del mismo y su relación con la actividad minera.

Beneficios del progreso científico en contextos mineros

12. Acciones para la innovación, mejoramiento y acceso a nuevas tecnologías para la actividad minera

El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones en contextos mineros está relacionado con la capacidad económica de los mineros por los costos que supone introducir nuevas tecnologías en las distintas fases de la producción minera. El mejoramiento de las condiciones de explotación en este ámbito muchas veces pasa por el ingenio de cada minero. En muchas ocasiones se adaptan elementos para suplantar maquinaria o herramientas existentes. En otras ocasiones los mineros han contado con el acompañamiento de programas privados y del Estado. Sin embargo, en muchas otras oportunidades se mencionó la falta de apoyo estatal.

Los requerimientos para llevar a cabo una minería responsable y en condiciones de seguridad que protejan la salud e integridad de los trabajadores implican el mejoramiento técnico y tecnológico de las Unidades de Producción Minera (UPM). Durante el diálogo con mineros en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Boyacá se encontró que el acceso a estas tecnologías para el mejoramiento requiere de inversiones económicas que en algunas ocasiones están fuera de su alcance (Ver capítulo de derecho al trabajo).

Son varios los casos que ilustran lo anterior. En Boyacá, algunos mineros que explotan carbón manifestaron las dificultades para instalar, por ejemplo, los multi-detectores de gases, pues sólo hay un proveedor que cobra precios muy altos. Otros expresaron, “*me pueden dar las capacitaciones que*

quiera, pero ¿dónde está el billete para comprar las vainas?", o "hay muchas exigencias pero no hay dinero".

En el SENA minero de Sogamoso dieron un claro ejemplo de los costos de los arcos de acero que se utilizan para el sostenimiento de la mina. Cada arco se debe importar porque no hay quien lo produzca en Colombia. El precio mínimo es de \$1 millón y se debe instalar uno cada metro o 1.20 m. A eso se le debe sumar la instalación y la apertura del frente. Para poder instalar eso se necesita producir mínimo 200 t/día.

Durante una visita a una operación minera de pequeña escala en el norte de Boyacá se hizo evidente cómo la tecnificación de la explotación contribuye a beneficiar a los dueños de mina y a los trabajadores. El día de la visita los operarios estaban estrenando martillos neumáticos. Hasta ese día habían usado picas (conocido como gancho en el entorno minero) para bajar el carbón del manto. Según afirmaron, con la nueva herramienta están en capacidad de producir mayor volumen, en menos tiempo, con menos esfuerzo. A pesar que la instalación de estas herramientas de costo elevado (incluye un compresor, una instalación de mangueras que los alimente, y los martillos mismos) el dueño de la mina tomó el riesgo pues ve ventajas económicas a largo a plazo.

Un elemento beneficioso para el desarrollo de la actividad minera en el departamento y el cuidado del agua es la introducción de columnas de aireación. Muchas UPM utilizan tanques de sedimentación para tratar el agua producto del bombeo de la mina, sin embargo muchas otras no tienen sistemas de tratamiento de agua. Por otro lado, los tanques de sedimentación, al combinarse con una torre de aireación mejoran sustancialmente el proceso de tratamiento pues la utilización de este sistema permite mejorar la calidad hídrica en lo referido a metales pesados. Para mejorar la efectividad de este método se deben juntar todas las fuentes de agua (bocamina y escorrentía del estéril) para tratarlas a todas conjuntamente. Este sistema supone una mayor inversión del minero.

Otro elemento que ha facilitado la explotación es la introducción de malacates. Aunque muchos son artesanales (buses o camiones viejos adaptados para la tarea) también hay motores eléctricos y a gasolina más tecnificados usados para mover la vagoneta dentro de los socavones. El uso de esta herramienta supone una diferencia sustancial con las formas en que anteriormente se extraía material de las minas. En un taller realizado en Mongua, Boyacá, un minero relató cómo su abuelo sacaba el carbón en una maleta, luego su padre introdujo la carretilla y ahora se usa este sistema que permite mayor producción con menos esfuerzo.

Para el caso de la explotación de oro entre los pequeños productores mineros así como los mineros artesanales, el proceso de amalgamamiento es la técnica aplicada para recuperar el oro de los demás minerales que se extraen. Este es un proceso relativamente sencillo, de bajo costo y que no requiere mayor inyección de capital sobre insumos técnicos ya que los equipos implementados son muy simples. Sin embargo, la recuperación del oro a partir de la amalgama se hace por medio de la quema de la misma, lo cual es un proceso altamente contaminante tanto para el medio ambiente como para las personas que operan estos equipos y en general a las personas que rodean la zona donde se lleva a cabo la quema. Una alternativa a dicho proceso es el uso del horno de retorta.

Con el fin de evitar la emisión de gases de mercurio y en aras de minimizar el impacto contaminante, promover la recirculación de aguas y el tratamiento del lodo cianurado durante el procesamiento del oro a pequeña escala, departamentos como Antioquia y Nariño han implementado el uso del horno de retorta. Lo cual según los mineros entrevistados, ha minimizado el impacto de la quema, en cuestiones tanto ambientales como de salud pública.

Las comunidades aledañas a los proyectos mineros en Cesar están siendo monitoreadas por sistemas de medición de la calidad de aire. La red del Cesar es operada por una firma de ingeniería que trabaja conjuntamente con Corpocesar. Los equipos usados (entre los que se encuentran estaciones manuales, semiautomáticas, automáticos y autónomos) y el laboratorio en el que se procesan las muestras recogidas son de alta tecnología. Además de realizar el muestreo, los resultados de las mediciones se socializan cada tres meses (~~Ver derecho a la salud y ambiente sano~~).

Por otro lado en el Chocó, la iniciativa de Oro Verde bajo la cual se promovió la explotación de oro de manera responsable y con un enfoque de desarrollo comunitario, siendo los Consejos Comunitarios de ASOCASAN y COCOMACOIRO los Consejos abanderados en la cuestión, tuvo gran acogida por la comunidad .

Esta iniciativa fue promovida con el apoyo de la *Alliance for Responsibility Mining* (ARM) y se implementó a partir del 2000, sin embargo el programa ha sido trasladado hacia otros escenarios en el Chocó biogeográfico²², principalmente en el departamento de Nariño. En este caso, el beneficio sobre el progreso científico se ha visto en el cuidado del entorno por medio de la recuperación, fomento y cuidado de técnicas tradicionales para la extracción del mineral, que no vayan en detrimento del entorno tanto natural como social.

Los pequeños mineros de La Llanada, Nariño, se constituyeron como cooperativa en la década de los 80. A partir de esa iniciativa han desarrollado un proceso de beneficio del oro que no requiere de mercurio por medio de métodos gravimétricos. Esta planta cuenta con el sello de certificación Fair Mined; esto les permitió acceder a mercados de oro en el que logran mejores precios. En la construcción de esta planta tuvieron la asesoría de ingenieros y el apoyo del gobierno municipal. Esto les ha permitido trabajar a una escala productiva más grande. Sin embargo, han tenido problemas porque la planta de beneficio está construida en una zona que no está declarada como zona industrial. Adicionalmente, la cooperativa también cuenta con un taller de orfebrería con clases gratuitas financiadas por la alcaldía.

En este mismo municipio también hay pequeños mineros que procesan el oro usando sistemas artesanales que no requieren de mercurio. Por medio de un sistema hidráulico, una cobija y el barequeo tradicional se logra emular la tecnología gravimétrica con buenos resultados en la recuperación de oro y cuidado del medio ambiente.

²² Una estrecha franja del territorio americano, que apenas alcanza los 175.000 km², un 2% de la superficie terrestre, alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta; se trata del Chocó Biogeográfico, una zona que incluye territorios de Colombia, Ecuador y Panamá, cuyos ambientes naturales se encuentran entre los mejor conservados de América. En (DIAZ & GAST, 2009)

En Samaniego, Nariño, un pequeño minero se dedicó de manera autodidacta a la fabricación de piezas de maquinaria usada específicamente en la pequeña minería de la región. Ahora tiene un pequeño taller dedicado a la producción de repuestos. Su recursividad le ha permitido convertirse en proveedor de piezas para varios mineros quienes también se ven beneficiados por el acceso a repuestos a menor costo.

En el Macizo Colombiano caucano hay mineros de tradición familiar que usan una técnica conocida como manila para barequear. Atan una cuerda alrededor de una piedra y la amarran a dos postes verticales. Luego, usando un palo logran hacer un movimiento de torsión para remover la roca y barequear en ese espacio.

En los ejemplos anteriores se muestra cómo algunos mineros de pequeña escala diseñan herramientas o adaptan tecnología a sus posibilidades. Esa recursividad les permite optimizar los procesos de explotación a sus condiciones económicas.

Con respecto a la extracción de materiales de construcción, en el departamento de Boyacá, la Cámara de Comercio de Sogamoso, en convenio con Corpoboyacá y Fenalcarbón, desarrolló un proyecto denominado SIGMA para el apoyo a UPM. Aunque sólo se ha desarrollado la primera fase de sensibilización, funcionarios de la Cámara de Comercio explicaron que el proyecto incluirá en su totalidad los componentes técnico, legal, humano y económico y comercial. Tal y como lo mencionó una funcionaria de la Cámara de Comercio *“SIGMA es un instrumento de gestión institucional que busca dar acompañamiento a los empresarios y trabajadores mineros para mitigar el impacto ambiental y para aumentar la productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas.”*

Para ser beneficiarios de este proyecto, los empresarios mineros debían vincularse al Nodo de Producción más limpia que se constituyó en el 2013, por medio de un acta en la que se comprometían a mejorar la gestión ambiental y cumplir con los Planes de Manejo Ambiental. Actualmente, el proyecto cuenta con un equipo base y se espera que, en el futuro, se pueda contar con consultores y con asistentes técnicos para el sector.

Asimismo, la autoridad ambiental de Boyacá, junto con alcaldías municipales y el Sena está llevando a cabo un proyecto de reconversión tecnológica de hornos para los sectores caleros y alfareros del departamento. Por ahora es un proyecto piloto que se está llevando a cabo en el valle de Sogamuxi con 160 UPM, donde se está determinando la viabilidad de las minas que pueden hacer esta reconversión y las que deben cerrar. El objetivo del proyecto es erradicar las fuentes de emisiones contaminantes.

En Sogamoso, por ejemplo, algunos de los pequeños y medianos mineros ya han vendido sus chircales y otros han hecho tecnificaciones a sus hornos. Un líder comunitario de este municipio, quien fue beneficiario de este proyecto, manifestó las ventajas que dicha tecnificación ha traído en la comunidad en términos de disminución de la contaminación y desarrollo de la capacidad productiva. Sin embargo, expuso que los principales retos actuales se basan en la dificultad de dar cumplimiento a las normas y requerimientos que exige la autoridad ambiental, ya que en la

comunidad no tienen conocimiento sobre la normatividad ambiental: *“Necesitamos un profesional que conozca el tema ambiental y nos ayude con el cumplimiento de los requisitos”*.

En el caso de Cundinamarca, los pequeños mineros, manifestaron durante un taller realizado en Ubaté, la importancia de contar con apoyo del gobierno para acceder a las mejoras tecnológicas que se requieren en el proceso productivo y de esta manera reducir el impacto de su actividad en la salud y el medio ambiente. Tal y como se mencionó por un miembro de la comunidad: *“a pesar de que hay una voluntad para cumplir con los requerimientos, hace falta programas para la mejora de los procesos productivos”* Otra persona argumentó: *“la autoridad nunca se ha presentado en la vereda para hacer capacitaciones”*.

En entrevista con el Secretario de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, esta clase de proyectos (reconversión tecnológica) no se identificaron como prioritarios a trabajar con los pequeños mineros, el tema de acceso a adelantos científicos (capacitaciones, asesoría) está previsto que sea a través de la Unidad Básica de Atención Minera.

13. Iniciativas empresariales para favorecer la vida cultural en los entornos mineros

En la tabla a continuación se compila información proviene de entrevistas con actores empresariales y de los informes de sostenibilidad y páginas web de las empresas:

EMPRESA	ESTRATEGIA	ACCIONES
Cerrejón	Fundación Guajira Indígena (Cerrejón)	<ul style="list-style-type: none"> • Promoción de iniciativas sostenibles e innovadoras enfocadas en las áreas de educación, desarrollo comunitario y salud • Apoyo a la consolidación de las organizaciones indígenas para ayudarles a construir mayor fortaleza comunitaria y capacidad de interlocución con las entidades que trabajan. • Proyectos productivos que fomenten el desarrollo y fortalezcan su cultura a través del trabajo comunitario. • Cooperación con las comunidades indígenas de La Guajira con el propósito de conservar la diversidad cultural de la región. • Canalización de recursos locales, nacionales e internacionales para invertir en los planes, programas y proyectos que se diseñen conjuntamente con las comunidades indígenas.

EMPRESA	ESTRATEGIA	ACCIONES
	Apoyo a comunidades del área de influencia del puerto de embarque ²³	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a la Institución etno-educativa Kamusuchiwo'u, a través de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Contratación de profesores de música y deportes. ○ Apoyo para la ampliación del área de bachillerato. ○ Suministro de agua e instalación de un sistema de captación de aguas lluvia. ○ Dotación de la sala de sistemas del colegio: tablero inteligente y profesor de sistemas. • Apoyo a productores de artesanías a través de un proceso de formalización de emprendimientos con el SENA. • Apoyo para la formalización y legalización de la actividad pesquera tradicional de la región. También han desarrollado proyectos para la recuperación de lanchas tradicionales. • Recreación, cultura y deporte para la comunidad: apoyan con profesores y en la organización de eventos deportivos como un campeonato de regata. Esto se hace en conjunto con la DIMAR y con Guardacostas
	Oferta de programas y actividades para niños, niñas y adolescentes (Cerrejón, 2013)	<ul style="list-style-type: none"> • Actividades lúdico-pedagógicas orientadas a rescatar los juegos tradicionales en las ludotecas NAVES “Una Mina de Alegría” del municipio de Barrancas. • Programas de música y deporte: se transmiten como educación complementaria a los procesos académicos formales. Fortalecen valores, además de que desarrollan en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la capacidad de establecer relaciones sanas y constructivas. • Programa de fortalecimiento cultural: busca recuperar y preservar las culturas ancestrales de La Guajira, fomentando la transmisión de conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones. • Formación de 80 gestores culturales en Barrancas, Hatonuevo, Albania y Uribia.

²³ Acciones referenciadas durante entrevistas con actores empresariales

EMPRESA	ESTRATEGIA	ACCIONES
	Apoyo a festivales locales (Informe de sostenibilidad Cerrejón)	<ul style="list-style-type: none"> • Festival de la cultura Wayuú. • Pasarela AMA - arte, moda y acordeón en el marco del Festival Francisco el Hombre en Riohacha.
Prodeco	Fundación La Jagua (Prodeco, s.f.)	<ul style="list-style-type: none"> • Proceso de investigación para determinar las causas de las altas tasas de embarazos adolescentes y otras problemáticas psicosociales como adicciones, violencia intrafamiliar, abuso sexual, carencia de proyectos de vida y baja autoestima. • Programa Redes de Vida para el fomento de “sanas prácticas culturales” en los niños y adolescentes de las áreas vecinas a nuestras operaciones mineras y portuarias. • Festival de la Vida para llegar a las comunidades vulnerables de las zonas rurales del área de influencia. Ofrece servicios de salud, recreación, cultura y deporte.
Drummond	Programa de responsabilidad social (Drummond, s.f.)	<ul style="list-style-type: none"> • Siembra de árboles • Apoyo a la comunidad pesquera aledaña al puerto. • Capacitación de servidores públicos. • Mejoramiento de infraestructura educativa de cinco municipios del Cesar y tres de Magdalena. • Dotación a la biblioteca pública de Codazzi. • Apoyo a programas de música en Becerril.
Paz del Río	Fundación Social PazdelRío (Paz del Río)	<ul style="list-style-type: none"> • Programas de apoyo a educación primaria y preescolar en dos municipios. • Uso productivo del tiempo libre <ul style="list-style-type: none"> ○ Apoyo a escuelas de formación deportiva en cuatro municipios de Boyacá y uno de Cundinamarca ○ Apoyo a la realización de los Juegos Campesinos en Paz del Río ○ Apoyo a los Juegos Inter-Veredales de Ubalá ○ Proyecto A Jugar en Nobsa

EMPRESA	ESTRATEGIA	ACCIONES
Holcim	Voluntariado Holcim (Holcim, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Apadrinamiento de 140 niños para regalos navideños y organización y patrocinio del torneo de fútbol de la Fundación Servicio Juvenil Padre Javier de Nicolás. • Colecta de regalos navideños para comunidades vecinas de dos plantas.
	Fundación Social Holcim Colombia (Holcim, 2015)	<ul style="list-style-type: none"> • Institución Educativa Centro Juvenil Campesino (CJC) de Nobsa, Boyacá. <ul style="list-style-type: none"> ○ Granja del CJC en la que se realizan proyectos pecuarios y agrícolas. • Comunidad de Aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> ○ Fomento a procesos educativos en 22 instituciones de las provincias del Tundama y Sugamuxi en temas ambientales. ○ Incentivo a la participación en el I Concurso de Cuento Ambiental. ○ Presentación de la experiencia de la Comunidad de Aprendizaje, en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación en Buenos Aires. • Educación Continuada <ul style="list-style-type: none"> ○ Diplomado La Participación Comunitaria en la Gestión Integral del Agua dirigido a 30 periodistas y comunicadores de Boyacá y Casanare.

EMPRESA	ESTRATEGIA	ACCIONES
Argos	Fundación Argos (ARGOS)	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de la Biblioteca Pública del Municipio de Nobsa. • Implementación del programa "Exploradores del Territorio" en Sogamoso y San Gil con niños y niñas para sensibilización sobre temáticas ambientales. • Capacitación de 140 personas de las zonas de influencia en fortalecimiento comunitario a través del Diplomado de Formación de Líderes. • Construcción de restaurantes escolares en las instituciones educativas Inceandes y Gustavo Jiménez sede La Manga en Sogamoso. • Construcción de laboratorios y aulas de clase en el Colegio Técnico de Nobsa.

Siglas	
ARM	Alliance for Responsibility Mining
ASOCASAN	Consejo Comunitario Mayor de Alto San Juan
BACRIM	Bandas Criminales
CIMA	Comité de Integración del Macizo Colombiano
COCOMACOIRO	Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Río Iró
ETS	Enfermedades de Transmisión Sexual
GAI	Grupos armado ilegales
ICA	Instituto Colombiano Agropecuario
ICBF	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
NBI	Necesidades Básicas Insatisfechas
OCAD	Órganos Colegiados de Administración y Decisión
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del trabajo
ONU	Organización de las Naciones Unidas
PIDESC	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
SPA	Sustancias Psicoactivas
UNESCO	Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura
UNICEF	<i>United Nations International Children's Emergency Fund</i>
UPM	Unidad de Producción Minera

Bibliografía

- AGUILAR. (2012). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de Revista Istmo: <http://istmo.mx/2012/09/cultura-y-derechos-humanos/>
- ANAFALCO. (s.f.). Recuperado el 25 de 11 de 2015, de <http://www.anafalco.com.co/anafalco-web/?q=node/25>
- ANM. (sf). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/intervencion_arqueologica.pdf
- ARGOS. (s.f.). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://www.argos.co/colombia/sostenibilidad/sociales/zona-centro>
- BEDOYA, j. (2013). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12824463>
- CASTILLO, A. (2013). *Los retreros y la gente del río Condoto*. Bogotá: Universidad de Los Andes.
- Cerrejón. (s.f.). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse/sistema-de-fundaciones/guajira-indigena.aspx>
- Cerrejón. (2013). Recuperado el Noviembre de 2015, de Informe de sostenibilidad 2012: http://www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/pdf/informes_sostenibilidad/Cerrejon-Informe-sostenibilidad-2012.pdf
- CINEP, PAS & ASK. (2014). Transformaciones territoriales en la comunidad del Hatillo, un recorrido por los impactos de la minería de carbón. 31.
- Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación General No. 17. (2005). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://portal.unesco.org/culture/es/files/30545/11432108781Comment_sp.pdf/Comment_sp.pdf Ibid
- Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 21. (2010). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de : <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8793.pdf?view=1>
- Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. (2003). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf>
- DELANEY, D. (2005). *Territory: A Short Introduction*. Oxford: Blackwell Publishing.
- DIAZ, & GAST. (2009). *El Chocó Biogeográfico de Colombia*. Bogotá: I/M Editores.

- Drummond. (s.f.). Obtenido de Resumen ejecutivo 2013 - 2014.:
http://issuu.com/drummondLtd/docs/resumen_ejecutivo_drummond_2013-2014?e=19253911/30401900
- GAMARRA, J. (2005). *La Economía del Cesar Después del Algodón*. Cartagena: Banco de la República.
- GONZALEZ, M. (2013). Transformaciones culturales y territoriales ocasionadas por la minería a gran escala: el caso de la comunidad del Boquerón (Cesar - Colombia).
- Holcim. (2015). *Informe de Desarrollo Sostenible 2014*. Recuperado el 25 de 11 de 2015, de <http://www.holcim.com.co/fileadmin/templates/CO/doc/IDS-2014.pdf>
- ICA. (14 de 8 de 2014). Recuperado el 25 de 11 de 2015, de [http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2013-\(1\)/Predios-productores-de-palma-de-aceite-deberan-reg.aspx](http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2013-(1)/Predios-productores-de-palma-de-aceite-deberan-reg.aspx)
- Informe de la Relatora Especial sobre Derechos Culturales . (2012). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/134/94/PDF/G1213494.pdf?OpenElement>
- Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales. (2012). Recuperado el 25 de 11 de 2015, de <http://www.ohchr.org/SP/Issues/derechosculturales/Paginas/benefitfromscientificprogress.aspx>
- Informe de sostenibilidad Cerrejón. (s.f.). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://www.cerrejon.com/site/sala-de-prensa/galeria-multimedia/galeria-pasarela-ama-en-festival-vallenato.aspx>
- KLIMAFORUM LATINOAMERICA NETWORK. (2015). Recuperado el 16 de 11 de 2015, de Cosmogonía Wayúu sobre Ordenamiento Territorial
- Organización de las Naciones Unidas. (1948). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://www.un.org/es/documents/udhr>
- Paz del Río. (s.f.). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://www.pazdelrio.com.co/es-es/Sostenibilidad/Paginas/FundacionSocial.aspx>
- PNUD. (2014). Recuperado el 25 de 11 de 2015, de CESAR: ANALISIS DE CONFLICTIVIDADES Y GESTION DE PAZ.
- Prodeco. (s.f.). *Informe de sostenibilidad 2011*. Recuperado el 25 de 11 de 2015, de http://www.prodeco.com.co/files/8013/4765/4421/report_2011_es.pdf
- QUINTO, J. (1 de 2013). Pan para hoy, hambre para mañana. *Revista Estudios del Pacífico Colombiano*.

TERRE DES HOMMES. (2015). Recuperado el 27 de 11 de 2015, de Case Study on Children's Right to a Healthy Environment Affected by Coal Mining in the EL Hatillo Community

UNESCO. (1972). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de <http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf>

VASCO, L. G. (2002). *Entre Selva y Páramo. Viviendo y pensando la lucha india*. Bogotá: ICANH.